

Sandboxes y FinTech en el Derecho Administrativo Económico en América Latina

Sandboxes and FinTech in Economic Administrative Law in Latin America

José Ignacio Hernández G.*

Universidad Católica Andrés Bello (Caracas, Venezuela)
info@joseignaciohernandezg.com
<https://orcid.org/0000-0003-1031-8541>

Recibido/Received: 02.03.2024/March 2nd, 2024

Aprovado/Approved: 29.04.2024/April 29th, 2024

Resumen: Particularmente en el siglo XXI, las nuevas tecnologías han facilitado la innovación en los servicios financieros. Para promover marcos regulatorios que fomenten la innovación, varios países de América Latina han creado sandboxes, es decir, espacios regulatorios de prueba para la experimentación. En términos legales, esos espacios son autorizaciones limitadas que permiten ofrecer servicios de tecnología financiera innovadora y experimental, mientras los reguladores y las firmas financieras aprenden y prueban esos nuevos servicios. Sin embargo, esos espacios se implementan a través del filtro de las instituciones del Derecho Administrativo, lo que no favorece la innovación y la experimentación. Por tanto, es necesario crear nuevas instituciones que, a partir de la complementariedad entre los sectores público y privado, fomenten la experimentación y la innovación.

Palabras-clave: FinTech. Sandboxes regulatorios. Mejora regulatoria. Innovación. Experimentación. Derecho Económico Administrativo. Derecho Administrativo Interamericano.

Abstract: Particularly in the 21st century, new technologies have facilitated innovation in financial services. To promote a regulatory frameworks that encourage innovation, several Latin American countries have created sandboxes, that is, regulatory spaces for experimentation. In legal terms, those spaces are limited authorizations that allow the offer of innovative and experimental financial technology services, while regulators and financial firms learn and test those new services. However, those spaces are implemented through the Administrative Law institutions' filter, which does not favor innovation and experimentation. Therefore, it is necessary to create new institutions that, based on the complementarity between the public and private sectors, encourage experimentation and innovation.

Como citar esse artigo/*How to cite this article:* HERNÁNDEZ G., José Ignacio. Sandboxes y FinTech en el Derecho Administrativo Económico en América Latina. *International Journal of Digital Law*, Belo Horizonte, ano 5, n. 1, p. 57-78, jan./abr. 2024. DOI: 10.47975/digital.law.vol.5.n.1.hernandez.

* Doutor em Direito pela Universidad Complutense de Madrid (Espanha). Profesor de Derecho Administrativo y Constitucional en la Universidad Católica Andrés Bello (Caracas, Venezuela). Profesor invitado, Universidad Castilla-La Mancha. Fellow, Growth Lab-Harvard Kennedy School. E-mail: info@joseignaciohernandezg.com.

Keywords: FinTech. Regulatory sandboxes. Regulatory improvement. Innovation. Experimentation. Economic Administrative Law. Inter-American Administrative Law.

Sumario: **1** Introducción – **2** Introducción al análisis económico de los sandboxes y la fintech – **3** La necesaria adecuación del Derecho Administrativo Económico en América Latina – **4** Conclusiones – Referencias

1 Introducción

El método comparado aplicado al Derecho Administrativo Económico en los países que integran América Latina permite apreciar tendencias similares, asociadas al desempeño económico en la región. Estas tendencias pueden diferenciarse en tres grandes períodos.¹

Así, la política de sustitución de importaciones se tradujo en técnicas de intervención administrativa basadas en controles estatales y en la gestión de actividades económicas de manera directa por medio de empresas públicas. Esta visión, consolidada en el siglo XX, ayudó a estructurar al Derecho Económico centrado en el Estado y en el rol de la Administración Pública, empleando para ello las categorías tradicionales de la actividad administrativa, como la policía económica y el servicio público. Tras esa visión subyacía la visión según la cual el sector público predomina sobre el sector privado.

Hacia fines del siglo XX, la región giró en torno a las políticas de liberalización económica, marcadas por el Consenso de Washington y el ímpetu privatizador. Las políticas de privatización marcaron al Derecho Administrativo Económico en la región por la introducción de la teoría general de la regulación económica. La incorporación de esa teoría se realizó sin un necesario ajuste del marco teórico del Derecho Administrativo, lo que llevó a considerar a la regulación como una modalidad de la actividad administrativa, cercana –o equiparable– a la actividad de policía económica. En esta visión, el sector privado fue considerado como prevalente.

En el siglo XXI, América Latina ensaya una nueva aproximación, impulsada por los riesgos globales, como la pandemia de la COVID-19 y el cambio climático. Bajo esta nueva visión, el sector público y el privado son complementarios, en especial, pues cada uno aporta capacidades necesarias para la promoción del desarrollo. Además, el rol de las Administraciones Públicas ya no se limita solo a paliar fallos de mercado, pues también les corresponde ayudar a crear mercados,

¹ HAUSMANN, Ricardo. Structural Transformation and Economic Growth in Latin America. In: *The Oxford Handbook of Latin American Economics*. Oxford Handbooks in Economics. Oxford: Oxford University Press, 2011. pp. 519 y ss.

fomentando la innovación.² Si el desarrollo es un proceso de autodescubrimiento,³ el Derecho Administrativo también debe diseñarse para promover la innovación y la experimentación.

Este cambio del Derecho Administrativo Económico es especialmente relevante en los servicios financieros, que han venido innovando a resultas de la transformación tecnológica. Tal es el origen de los servicios financieros prestados por nuevas tecnologías, sector tecnofinanciero o FinTech.⁴ La esencia de este sector es la innovación y la experimentación, todo lo cual precisa de un Derecho Administrativo flexible. Precisamente, el Derecho se ha adecuado a estas exigencias mediante reglas –o instituciones– que favorecen la innovación y experimentación, conocidas como “sandboxes” o un “entorno de pruebas”.⁵

Para el Derecho Administrativo Económico en América Latina, los entornos regulatorios de prueba para promover la innovación en el sector tecnofinanciero suponen retos teóricos, pues la base de ese Derecho sigue siendo el modelo francés, anclado en conceptos como el servicio público que difícilmente se adaptan a las nuevas exigencias. Así, mientras la innovación precisa de un Derecho Administrativo flexible, dinámico y que aprenda de sus propios errores, el modelo francés –como ha sido aplicado en la región– promueve esquemas rígidos, estáticos y que penalizan los errores.

No es cuestión, por ello, de simplemente trasponer el concepto de entorno de pruebas para servicios tecnofinancieros al marco teórico tradicional, para aludir así al Derecho Administrativo del sector tecnofinanciero o de los entornos regulatorios de prueba. Sería inadecuado, así, enfocar estas técnicas de intervención administrativa a través de las técnicas de la policía administrativa por medio de la cual la Administración Pública puede ordenar y limitar a los nuevos servicios financieros, considerados también como servicios públicos. Tal aproximación podría hacer, del Derecho Administrativo, un obstáculo para la innovación financiera en América Latina.

En este breve ensayo desarrollamos esta premisa, partiendo de diversos estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Así, nuestro interés consiste en explicar –desde la perspectiva interdisciplinaria– cuáles son las razones económicas que, tras los “sandboxes” y en “FinTech”, justifican una renovación conceptual del Derecho Administrativo en América Latina, basado en la complementariedad entre el sector público y el sector privado.

² MAZZUCATO, Marianna. *Transformational change in Latin America and the Caribbean. A mission-oriented approach*. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): 2022. pp. 58 y ss.

³ HAUSMANN, Ricardo, et al. *Reconfiguring Industrial Policy: A Framework with an Application to South Africa*. *CID Working Paper N° 168*, Center for International Development at Harvard University, 2007, p. 3-4.

⁴ La Fundación del Español Urgente recomienda usar la expresión *tecnofinanzas*.

⁵ Que es la expresión recomendada por la Fundación del Español Urgente.

2 Introducción al análisis económico de los sandboxes y la fintech

Los servicios financieros cumplen importantes funciones en la economía, como mecanismos que canalizan el ahorro y facilitan el sistema de pagos. Tradicionalmente se ha observado que fallas en la información limitan la eficiencia para el libre intercambio de servicios financieros, todo lo cual justifica la intervención pública. El rol tradicional del Estado –a través de la Administración Pública– es corregir situaciones de información asimétrica, brindando confianza al intercambio de servicios financieros. En tanto estos servicios se anclan en la moneda emitida por el Estado, la intervención pública se justifica, también, para garantizar la integridad del sistema financiero.⁶

El régimen jurídico-administrativo tradicional de los servicios financieros, anclados en la idea del servicio público, ha estado además acompañado del reconocimiento de la potestad sancionadora, orientada a penalizar el incumplimiento de los deberes anejos a los servicios financieros. Esto es, que el incumplimiento de las limitaciones establecidas en la Ley –y las limitaciones que complementariamente se incluyen en los reglamentos– tiende a ser considerado una conducta antijurídica que justifica la potestad sancionadora. A estos efectos, la Administración retiene potestad de inspección, en especial, para recabar –incluso coactivamente– información. En todo este sistema, el acto administrativo ocupa, como es de esperar, lugar central, al igual que el principio de legalidad y la reserva legal.

La crisis financiera global de 2008 impulsó cambios tecnológicos para incrementar la eficiencia y seguridad de los servicios financieros. La evolución de las redes sociales y la capacidad de procesamiento de datos masivos impulsó innovaciones tecnológicas que permitían sobrellevar alguno de los fallos de información del sector. Esta innovación financiera no solo comenzó a plantearse *dentro* del sector financiero también, y en especial, *fuera* de este sector. Así, la revolución tecnológica, al lograr sortear algunos de los fallos que habían justificado el surgimiento de las instituciones financieras, facilitó emprendimientos de servicios financieros al margen de esas instituciones. El sector bancario siempre ha empleado tecnología. Por ello, el interés suele centrarse en la oferta de servicios financieros que, apoyados en plataformas en línea y dispositivos móviles, emplean nuevas tecnologías para proveer servicios financieros, incluyendo inteligencia artificial, cadena de bloques, la interfaz de programación de aplicaciones y los macrodatos.⁷

⁶ ALEXANDER, Kern. *Principles of Banking Regulation*. Oxford: Oxford University Press. 2019. pp. 33 y ss.

⁷ MAGNUSON, William. Regulating fintech, *VAND. L. REV.*, n. 71, 2018. pp. 1168 y ss.

2.1 La innovación tecnológica en los servicios financieros y los retos de su regulación

El cambio al cual nos hemos referido no consiste –solamente– en el uso de tecnología o en la innovación tecnológica, sino en el tipo de tecnología con la cual se innova en la oferta de servicios financieros.⁸ La digitalización de la economía y la difusión de dispositivos móviles han derivado en un ambiente propicio para crear nuevos servicios financieros. La información –pieza clave del sector bancario– ahora es almacenada y procesada de manera masiva, descentralizada y encriptada, con aplicaciones que permiten su procesamiento efectivo y transparente, incluso, en la nube. Todo lo anterior crea un ambiente propicio para nuevos emprendimientos que ofrezcan nuevos servicios financieros. En este entorno, la regulación jurídica de los servicios tecnofinancieros cumple varias funciones.⁹

Así, la regulación jurídica asigna derechos de propiedad sobre los servicios financieros, y fija mecanismos para resolver cualquier disputa que pueda plantearse. Esta función del Derecho se ha visto impactada por los avances tecnológicos, en especial, con el surgimiento de los contratos inteligentes. Más allá de esta innovación, en todo caso, los conceptos jurídicos claves del Derecho Civil siguen aplicando a los nuevos servicios financieros.

La regulación también se justifica para atender los fallos de mercado presentes en los servicios tecnofinancieros.¹⁰ La tecnología ha superado algunos de los fallos que dieron lugar al Derecho Bancario tradicional, y que, por ende, justifican la intervención de la Administración Pública. Hay aquí, en todo caso, importantes limitaciones que provienen del conflicto que supone aplicar el Derecho Administrativo –que es un Derecho estatal– a servicios financieros que prestan fuera del Estado. No es casual que algunas de las tecnologías en boga –como las cadenas en bloque y las criptomonedas– surgieron con el intento de permitir servicios financieros más allá del Estado. Y no es casual, tampoco, que crisis financieras de emprendimientos, como recientemente ha sucedido con FTX, coloquen en evidencia los riesgos de un indebido control estatal.¹¹

La relación entre la regulación y los servicios tecnofinancieros depende, en resumen, de la tecnología empleada y del tipo de servicio ofrecido. Estas dos

⁸ SHERIDAN, Iain. *Financial Regulation and Technology. A Legal and Compliance Guide*. Northampton: Elgar Practical Guides, 2022. pp. 6 y ss.

⁹ DARBELLAY, Aline. Conclusion to Data Governance in AI, FinTech and LegalTech: Law and Regulation in the Financial Sector. In: LEE, Joseph; DARBELLAY, Aline (ed.). *Data Governance in AI, FinTech and LegalTech Law and Regulation in the Financial Sector*. Northampton: Elgar Practical Guides, 2022. pp. 279 y ss.

¹⁰ SINGER Joseph. *No freedom without regulation: the hidden lesson of the subprime crisis*. New Haven: Yale University Press, 2015. pp. 59 y ss.

¹¹ Por ejemplo, vid. RUTGERS. *The Significance and Consequences of the FTX Crypto Collapse*. 13 de diciembre de 2022, tomado de: <<https://law.rutgers.edu/news/significance-and-consequences-ftx-crypto-collapse>>.

variables marcan, a su vez, la relación entre los servicios financieros tradicionales y los servicios tecnofinancieros.

De esa manera, las innovaciones tecnológicas que resultan de interés para la regulación son: (i) pagos móviles y billeteras electrónicas que facilitan la gestión de pagos, incluso, sin necesidad de intermediación financiera; (ii) interfaces de programación de aplicaciones (o APIs), mediante las cuales sistemas de computación pueden intercambiar datos relacionados con gestión de pagos, lo que genera potenciales conflictos con la privacidad de datos personales, así como (iii) inteligencia artificial y procesamiento de macrodatos, lo que abarca procesos de aprendizaje automático, uso de identificación biométrica, servicios en línea basados en algoritmos y cadenas de bloques.¹²

Estas tecnologías pueden ser empleadas por el sector bancario, como es el caso de los llamados *challenger banks*, o sea, las instituciones bancarias que a través de nuevas tecnologías innovan en la prestación de servicios de intermediación, reduciendo los costos de transacción y promoviendo la equidad en la bancarización. Estas instituciones operan en el marco de la regulación bancaria, lo que incluye la obtención de la correspondiente autorización para ofrecer servicios de intermediación. Junto a estas instituciones bancarias, se encuentran los operadores financieros no-bancarios, que prestan servicios financieros, pero sin intermediación y, por ello, sin que les aplique la regulación bancaria. Quizás el mejor son las plataformas digitales de pago o las plataformas que facilitan mecanismos colectivos de financiamiento o crowdfunding.¹³

La existencia de operadores financieros no-bancarios que complementan a las instituciones bancarias plantea un reto regulatorio, en cuanto a la posibilidad de extender, a los primeros, la regulación bancaria. Se trata, en su esencia, de un problema de definición legal del ámbito de aplicación de la regulación bancaria, que, en su sentido estricto, debe aplicar solo a la actividad orientada a captar recursos del público para ofrecer créditos. Esto no quiere decir que los operadores no-bancarios no deban estar regulados, sino que la regulación aplicable a éstos debe ser distinta a la regulación bancaria.

De esa manera, la relación entre la regulación y los servicios tecnofinancieros puede estudiarse desde dos perspectivas: como una barrera a la innovación o como un elemento promotor de la innovación. Así, la aplicación del esquema regulatorio

¹² MADIR, Jelena. Introduction-What is Fintech? In: MADIR, Jelena (ed). *FinTech: law and regulation*, Northampton: Elgar Practical Guides, 2021. pp. 4 y ss. Véase también a BIJKERK, Werner. El impacto de la tecnología al mercado financiero y sus desafíos regulatorios. In: ZUNZUNEGUI, Fernando (ed), *Regulación financiera y FinTech*. Navarra: Aranzadi, 2019. pp. 21 y ss.

¹³ BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. *FINTECH en América Latina y el Caribe*. Un ecosistema consolidado para la recuperación. Washington D.C., 2022. pp. 66 y ss. Esto ha dado lugar al estudio de modalidades de servicios financieros apoyados en las nuevas tecnologías, como el *InsurTech*, aplicable al sector asegurador.

bancario a los servicios tecnofinancieros, incluyendo aspectos tales y como controles de acceso al mercado y cumplimiento de coeficientes económicos, por ejemplo, que exijan capitales mínimos, podrían obstruir la innovación. El debate, en todo caso, no puede limitarse a decidir si estos servicios *deben ser* regulados, sino *cómo deben* ser regulados, procurando que la regulación no solo atienda fallos de mercado, sino que además contribuya a crear mercados.

2.2 La innovación tecnológica y los espacios regulatorios para la experimentación. Los estándares globales

La regulación también debe cumplir otro rol en relación con los servicios tecnofinancieros, como lo es promover y facilitar la innovación. La Administración Pública no queda limitada solo a corregir fallos de mercado, sino a colaborar con el sector privado para la creación de mercados, incluyendo la creación de nuevos servicios financieros. Para lograr una colaboración creativa entre el sector público y el sector privado, se han ordenado jurídicamente espacios regulatorios de experimentación, conocidos como entorno de pruebas.¹⁴

La justificación económica de estos entornos regulatorios puede resumirse de la siguiente manera. Por un lado, los servicios tecnofinancieros requieren interactuar con usuarios para experimentar y así, mejorar la calidad de los servicios ofrecidos. Por el otro lado, debido a fallas de información, los usuarios de servicios experimentales están en una situación de especial vulnerabilidad. El carácter experimental del servicio no permite aplicar los controles de acceso al mercado ordinarios, ante lo cual, se crean controles de entrada temporales, limitados y flexibles, para favorecer, así, el proceso de aprender mientras se emprende la actividad.¹⁵

Con lo cual, los entornos regulatorios de prueba parten de la complementariedad entre el sector privado y público, en tanto los operadores financieros y la Administración colaboran para perfeccionar los servicios tecnofinancieros y, con ello, mejorar la calidad de la regulación. Esto requiere un grado especial de tolerancia frente al error, sin menoscabo de la tutela de los usuarios. Asimismo, los deberes de los operadores financieros son más flexibles que aquellos que operan en un entorno regulatorio ordinario. Con lo cual, estos entornos son también una oportunidad para construir capacidades en la Administración Pública, a los fines de diseñar

¹⁴ Esto es, los llamados “regulatory sandboxes”. Cfr.: ALLEN, Hilary. Regulatory Sandboxes. *GEO. Wash. L. REV.*, n. 87, 2019. pp. 579 y ss.

¹⁵ ZETZSCHE, Dirk A., et al. Regulating a Revolution: From Regulatory Sandboxes to Smart Regulation. *FORDHAM J. CORP. & FIN. L.*, n. 23, 2017. pp. 31 y ss. De acuerdo con los autores, el propósito es crear un “espacio seguro regulatorio para instituciones financieras innovadoras y actividades respaldadas por tecnología”, y así, crear un “entorno para que las empresas prueben productos con menos riesgo de ser “castigados” por el regulador por incumplimiento. A cambio, los reguladores requieren que los solicitantes incorporen salvaguardas apropiadas para aislar al mercado de los riesgos de su negocio innovador” (p. 64).

una regulación adecuada a la innovación tecnológica. De allí que se trata de una “regulación inteligente”, en el sentido que la Administración aprende mientras regula. En resumen, los entornos regulatorios de prueba responden a la necesidad de ajustar el marco regulatorio financiero a la innovación y experimentación, de forma tal que ese marco promueva la competencia al facilitar disrupciones tecnológicas.¹⁶

La colaboración entre el sector privado y público, y la construcción de capacidades en la Administración Pública, también permiten el uso de las nuevas tecnologías por la Administración, en lo que suele conocerse como RegTech, o tecnología regulatoria. Herramientas tales y como la inteligencia artificial y la cadena de bloques, facilitan la implementación de la regulación financiera por la Administración.¹⁷ Un ámbito en el cual esta visión se ha implementado es la regulación de la inteligencia financiera, que se ha aprovechado del procesamiento de datos masivos, en lo que se conoce como SupTech, o la supervisión tecnológica.¹⁸

La implementación de estos espacios, así como la promoción de servicios tecnofinancieros, tienden a seguir estándares globales. Estos estándares surgen de la propia naturaleza de la oferta de estos servicios que, al anclarse en nuevas tecnologías, tienden a deslocalizarse, en el sentido que la oferta de servicios tecnofinancieros no se limita a un mercado geográficamente cercado, en tanto la tecnología que le sirve de fundamento es global.¹⁹

Por ello, el Derecho Global resulta especialmente útil en esta materia. Basta con señalar que los servicios tecnofinancieros, al ser globales, requieren de un marco jurídico igualmente global, todo lo cual se traduce en instrumentos no-coactivos, llamados *soft law*. A su vez, el conocimiento generado en los espacios regulatorios para la experimentación incide en la oferta global de estos servicios, todo lo cual aconseja que en el diseño e implementación de estos espacios se tomen en cuenta otras experiencias. De ello resulta que el proceso de aprendizaje en estos espacios –sujetos al ordenamiento jurídico del Estado que los implementa– se beneficia de la experiencia en otros países, lo que crea condiciones ideales para conformar redes de espacios regulatorios.²⁰

¹⁶ Por ejemplo, tales fueron las razones que llevaron a la agencia financiera del Reino Unido a implementar estos espacios (FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY. *Regulatory sandbox*. Noviembre de 2015).

¹⁷ MADIR, Jelena. Introduction-What is Fintech? In: MADIR, Jelena (ed). *FinTech: law and regulation*, Northampton: Elgar Practical Guides, 2021. pp. 4 y ss.

¹⁸ HO HEE JUNG, John. RegTech and SupTech: the future of compliance, In: *FinTech: law and regulation*, Northampton: Elgar Practical Guides, 2021. pp. 291 y ss.

¹⁹ Por ejemplo, del COMITÉ DE SUPERVISIÓN BANCARIA DE BASILEA, véase *Buenas prácticas. Implicaciones de los avances en tecnofinanzas (fintech) para los bancos y los supervisores bancarios*, 2018.

²⁰ Esto es, la interoperatividad entre los espacios regulatorios. Véase, FERRANDIS, Carlos Muñoz. *Fintech Sandboxes and Regulatory Interoperability*. Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford. 14 de abril de 2021. Tomado de: <<https://law.stanford.edu/2021/04/14/fintech-sandboxes-and-regulatory-interoperability/>>.

3 La necesaria adecuación del Derecho Administrativo Económico en América Latina

El Derecho Administrativo Económico en América Latina, hasta fines del siglo XX, seguía los cauces de esa disciplina en Francia, Italia y España. Con lo cual, las técnicas de la actividad administrativa –y en especial, el servicio público– fueron empleados para estudiar, teóricamente, la intervención administrativa en la economía. Por ello, en realidad, el Derecho Administrativo Económico no tiene autonomía científica: es, sencillamente, el estudio del Derecho Administrativo de acuerdo con la intervención de la Administración en la economía. Por consiguiente, en América Latina, el Derecho Administrativo Económico parte del concepto de Derecho Administrativo como un Derecho exorbitante del Derecho Común, en el cual la Administración –previo procedimiento administrativo– dicta decisiones unilaterales –el acto administrativo– o celebra contratos –el contrato administrativo–.

A fines de la década de los noventa, sin embargo, el Derecho Administrativo en América Latina fue influenciado por lo que podría llamarse la *revolución de la regulación*, esto es, la introducción del concepto de regulación en el Derecho Administrativo. Como en su momento explicamos, la recepción de este concepto en el Derecho Administrativo puede enfocarse de varias maneras.²¹ Por un lado, la regulación puede ser entendida como una nueva forma de la actividad administrativa, esto es, la actividad administrativa de regulación. El segundo enfoque es equiparar la regulación económica a la actividad de policía económica. El tercer enfoque consiste en considerar que la utilidad de la teoría de la regulación económica reside en la causa de la intervención administrativa –los fallos de mercado–. En cuanto a los actos dictados por la Administración, el concepto puede aplicar a actos reglamentarios, pero también, y eventualmente, a actos individuales.²²

En nuestra opinión, la regulación económica no es una nueva modalidad de la actividad administrativa, sino una aproximación especial a la actividad administrativa de ordenación y limitación en la economía. La especialidad de esta aproximación viene determinada por la causa de esa actividad, que es el análisis económico, incluyendo los fallos de mercado.

²¹ HERNÁNDEZ G., José Ignacio. *Derecho Administrativo y Regulación Económica*. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 2006.

²² Véase a MORENO CASTILLO, Luis Ferney. *Teoría de la regulación*. Hacia un Derecho Administrativo de la Regulación. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2019. pp. 55 y ss.

3.1 El filtro del Derecho Administrativo en América Latina y su incidencia en las políticas públicas orientadas a la promoción de la innovación financiera

Como explicamos en la sección anterior, las políticas públicas orientadas a promover la innovación en los servicios financieros responden a razones económicas en las cuales el Estado cumple funciones de facilitación de esa innovación. Estas políticas, además, tienden a seguir estándares globales que definen buenas prácticas regulatorias, todo lo cual puede derivar en cierta uniformidad. Pero esas políticas se implementan a través de las instituciones –reglas jurídicas– del Derecho Administrativo, de lo cual resulta que éste es una suerte de filtro de las políticas públicas de innovación tecnológica. En América Latina, este filtro puede afectar, adversamente, la implementación de estas políticas.²³

En efecto, el régimen francés –bajo el cual se estructura el Derecho Administrativo en América Latina– no es compatible con las exigencias de las políticas de innovación tecnológica. A manera de síntesis, podemos identificar diversas áreas de conflicto.²⁴

Así, en *primer lugar*, el Derecho Administrativo en América Latina está estructurado a través de potestades administrativas, por medio de las cuales la Administración, de manera unilateral, crea, extingue o modifica relaciones jurídico-subjetivas. Bajo esta visión, la Administración tiene una posición de supremacía frente a los operadores económicos, lo que queda reflejado en la expresión que se refiere a éstos como “administrados”, o sea, como sujetos cuya esfera jurídica es pasivamente moldeada por la Administración. A esta visión coadyuva la generalización del servicio público, en especial, en el sector financiero. Como el concepto de servicio público se ancla en la *publicatio*, la Administración asume potestades –no en pocas ocasiones, bastante imprecisas– de configuración del sector financiero.

La posición de supremacía de la Administración Pública contradice la colaboración público-privado en la cual descansan los espacios regulatorios para la experimentación en la oferta de servicios tecnofinancieros. Esta colaboración desfavorece estructuras verticales y promueve estructuras horizontales de cooperación. La Administración no interviene en estos espacios de manera unilateral y coactiva, sino a través de

²³ Seguimos el concepto económico de instituciones, como las reglas que de manera coactiva inciden en el intercambio de bienes y servicios y por ende, influyen en los costos de transacción. Estas instituciones, de manera especial, asignan derechos económicos y fijan reglas de solución de controversia (instituciones económicas), al tiempo que determinan la organización del Estado (instituciones políticas). Principalmente, seguimos aquí a NORTH, Douglass. *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press, 1999. pp. 3 y ss.

²⁴ Excedería de los límites de este trabajo ahondar en el estudio del Derecho Administrativo Comparado en América Latina. La exposición del texto principal resume los rasgos más centrales de los principios comunes en la región. En sentido general, para el estado del tema en la región, véase a CASSAGNE, Juan Carlos. El servicio público. In: RODRÍGUEZ-ARANA, Jaime; RODRÍGUEZ, Libardo (Directores). *Curso de Derecho Administrativo iberoamericano*. Madrid: Editorial Comares-INAP, 2015. pp. 401 y ss.

la *coordinación iterativa* con los operadores financieros. La coordinación, técnica conocida en la organización administrativa, debe redimensionarse para aplicar también a las relaciones jurídico-administrativas. No se trata, se advierte, de una solución del todo novedosa, pues la doctrina ya ha aludido a la actividad consensual de la Administración, esto es, aquella en la cual las decisiones de la Administración son resultado del consenso entre el sector público y el privado.²⁵

En *segundo* lugar, el Derecho Administrativo asigna costos a los errores, lo que se traduce en cierta aversión a la experimentación. Desde la perspectiva de los empleados públicos, el estatuto de la función pública suele basarse en normas rígidas en las cuales desviaciones, omisiones o resultados adversos afectan negativamente el desempeño del empleado público, pudiendo incluso dar lugar a sanciones disciplinarias. Junto a ello, el régimen de control fiscal también eleva el costo de cualquier error que pueda repercutir adversamente en contra del patrimonio público. Esto implica que el empleado público está expuesto a contingencias que pueden incidir en su responsabilidad civil, penal y administrativa. Este sistema, al elevar los costos del proceso de toma de decisiones, tiende a generar una posición de inhibición del empleado público frente a la innovación tecnológica.

Los riesgos aplican también en el plano de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. El Derecho Administrativo en América Latina ha evolucionado hacia un sistema de responsabilidad patrimonial centrado en la víctima, que expande por ello los supuestos de responsabilidad de la Administración, en especial, en el ámbito extracontractual. La teoría de la falta del servicio tiende a elevar los estándares que la actividad administrativa debe cumplir, todo lo cual genera el riesgo de que cualquier error en el proceso de experimentación de los servicios tecnofinancieros derive en condenas patrimoniales por funcionamiento anormal de los servicios públicos. A este riesgo abona la tesis según el cual los usuarios de servicios financieros son débiles jurídicos cuya especial tutela asume la Administración, en concreto, para la protección de sus derechos fundamentales, incluyendo derechos económicos y sociales. En función a lo anterior, el control jurisdiccional de la Administración Pública también emerge como un actor en las políticas públicas de innovación tecnológica.

En *tercer* lugar, encontramos la capacidad de los empleados públicos. Así, la regulación de los servicios tecnofinancieros requiere funcionarios con capacidades adecuadas para interactuar con los operadores económicos, en especial, en espacios digitales.²⁶ La fragilidad de la función pública también eleva los riesgos

²⁵ HERNÁNDEZ G., José Ignacio. *Lecciones de Procedimiento Administrativo*. Caracas: FUNEDA, 2011. pp. 27 y ss.

²⁶ HERNÁNDEZ G., José Ignacio. Transformación digital y empleo público. *Revista de Derecho Funcional*, n. 28, Caracas, 2022. pp. 21 y ss.

de que, frente a la innovación, los funcionarios asuman una posición de cautela e incluso, recelo. Esta fragilidad describe la brecha entre las tareas que la función pública debe emprender para la promoción de la innovación tecnológica, y las capacidades que efectivamente existen. Más allá de la tradicional fragilidad de las Administraciones Públicas en la región, lo cierto es que se aprecia también la fragilidad en capacidades digitales, o sea, los conocimientos que la función pública debe tener para implementar políticas de innovación tecnológica. Esta fragilidad, además, puede crear barreras informales para que los empleados públicos asuman una posición proactiva a favor de la innovación, ante el riesgo de que tal posición sea percibida como una consecuencia de su captura por los operadores financieros.

En *cuarto lugar*, encontramos el paradigma del cual parte el Derecho Administrativo, que considera al sector público y privado como rivales. El servicio público –empleado en los servicios financieros– considera que el Estado –o sea, el sector público– tiene un rol prominente a través de la *publicatio*. Frente a esta visión, y a través de la figura del nuevo servicio público, se ha promovido una posición que, en cierto modo, es de signo opuesto, basada en la primacía del mercado.²⁷ A esta última visión se enmarca la llamada auto-regulación, esto es, las reglas dictadas por el sector privado –típicamente por medio de asociaciones– para ordenar la actividad económica que se lleva a cabo, en todo caso, bajo supervisión de la Administración.²⁸

La innovación tecnológica requiere de un nuevo paradigma: la complementariedad entre el sector público y el privado. El sector privado necesita al Estado y, en concreto, a la Administración Pública, a las instituciones y otros bienes públicos proveídos por la Administración, para crear facilitar la oferta de servicios en condiciones de seguridad jurídica, especialmente, en protección de los usuarios.²⁹ Por su parte, la Administración Pública requiere de las capacidades del sector privado. Ni la primacía del sector público ni la primacía del sector privado son paradigmas adecuados.

La *quinta condición* es la tendencia a enfocar al Derecho Administrativo –y a la regulación– desde una visión cuantitativa, lo que ha llevado a acentuar las políticas llamadas a reducir el rol de las Administraciones Públicas, incluyendo la desregulación. Pero la innovación tecnológica precisa de una regulación que se enfoque en el aspecto cualitativo, o sea, una regulación de calidad, que logre

²⁷ HERNÁNDEZ G., José Ignacio. Servicio público y regulación económica: una perspectiva desde la América española. In: MARTÍNEZ, Juan Miguel de la Cuétara. *Derecho administrativo y regulación económica. Liber amicorum profesor Doctor Gaspar Ariño Ortiz*. Madrid: La Ley, 2011. pp. 877 y ss.

²⁸ VILLAFUERTE MENDOZA, José. ¿Podemos regular las FINTECH? Desafíos y propuestas. *THEMIS-Revista de Derecho*, n. 79, Lima, 2021. pp. 235 y ss.

²⁹ Vale la pena aclarar que, al referirnos a bienes públicos, empleamos la expresión en sentido económico, esto es, como los bienes y servicios que se ofrecen en condiciones de no-rivalidad y no-exclusividad, y que, por ello, el mercado no puede proveer.

promover la innovación.³⁰ Desde el punto de vista jurídico, el concepto de regulación de calidad se ancla en los estándares de la buena administración que, orientados al bien común, exigen de una actividad administrativa que de manera efectiva promueva servicios financieros mediante el uso de nuevas tecnologías en beneficio de las personas, y en especial, en beneficio de la inclusión financiera.

Como se observa, las políticas públicas para la innovación tecnológica en América Latina precisan de un Derecho Administrativo orientado a esa innovación. Esto es, un Derecho Administrativo abierto a la innovación, la experimentación y la creación de capacidades regulatorias a partir de la interacción entre el sector público y privado. No, así, un Derecho Administrativo centrado en formalidades que pivotan en torno a privilegios y prerrogativas.

3.2 Algunas experiencias en América Latina

Como veíamos, el concepto de regulación fue introducido hacia fines de la década de los noventa del pasado siglo, principalmente, con un enfoque orientado a la primacía del mercado y por ende, al enfoque cuantitativo de la regulación. Pero a partir del presente siglo, el interés ha pasado a ser la mejora regulatoria, y en especial, la revisión continua de las técnicas de intervención administrativa en la economía para realzar su calidad.³¹

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) ha venido impulsando el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a medir la calidad de la regulación. Esto es lo que se conoce como política regulatoria, es decir, el conjunto de acciones y estrategias orientadas a determinar la justificación de la regulación y su calidad, tomando en cuenta el propósito perseguido. La política regulatoria presta atención al proceso de toma de decisiones de la regulación, o gobernanza, promoviendo técnicas que mejoren la calidad y efectividad de la regulación, facilitando así a la adopción de decisiones racionales sobre qué regular, para qué regular y cómo regular. Esto pasa por implementar técnicas orientadas al control de calidad de la regulación.³²

³⁰ FARIAS, Pedro, et al. *¿Preparados para regular? Lecciones y desafíos de la regulación en América Latina*. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo, 2022.

³¹ MORENO CASTILLO, Luis Ferney. *Teoría de la regulación*. Hacia un Derecho Administrativo de la Regulación. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2019. pp. 95 y ss.

³² ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO. *Regulatory Policy and Governance: Supporting Economic Growth and Serving the Public Interest*. 2011. pp. 17 y ss. La OECD comenzó a prestar atención a la política regulatoria hacia 1995, cuando propuso la adopción de lineamientos para mejorar la calidad de la regulación del gobierno, un proceso que culminó en 2005 con la adopción de los *Principios Guías para la Calidad Regulatoria y su Implementación*. En sus orígenes, el interés por la política regulatoria estuvo centrado en la apertura al libre mercado y la regulación, pero posteriormente se adoptó una visión más amplia, orientada al servicio al interés general. Mientras que en sus orígenes el interés se centraba en los costos de la regulación, en su evolución posterior se amplió el estudio para comprender los costos de la ausencia de regulación, y por ello, los beneficios de una regulación de calidad. Esto ha

De esa manera, la política regulatoria, junto con la política fiscal y la política monetaria, se consideran como una de las técnicas principales del Estado para intervenir en la economía. La política regulatoria es intercambiable con políticas fiscales y, por ende, puede ser una alternativa a medidas fiscales que impliquen aumento del gasto público y con ello de la presión tributaria. Con lo cual, dentro de los principios de la gobernanza democrática,³³ la política regulatoria se orienta a reforzar la legitimidad democrática, la eficacia y la eficiencia de la regulación. Esto es fundamental para reducir los costos de implementación de la regulación, todo lo cual genera condiciones favorables a la confianza ciudadana.

Desde el Derecho Administrativo, la perspectiva de la política regulatoria se traduce en diversas consecuencias jurídicas. Así, por un lado, el Derecho Administrativo introduce principios en el procedimiento administrativo regulatorio que aseguran la participación ciudadana, todo lo cual ha permitido redimensionar el procedimiento administrativo, que de cauce formal para garantizar el derecho a la defensa y el principio de legalidad, pasa a ser también cauce formal para realzar la calidad de la actividad administrativa, todo lo cual entronca con los estándares de la buena administración. Este procedimiento administrativo regulatorio abierto, además, facilita la coordinación entre los diversos niveles supranacionales, nacionales y subnacionales involucrados en la política regulatoria, así como la cooperación con el sector privado.

Además, el Derecho Administrativo presta importancia a la organización regulatoria, en un planteamiento que debe ir más allá de la figura de la Administración Independiente, de gran uso hacia fines de la década pasada. Hay que recordar que toda la Administración Pública debe obrar con objetividad para el servicio concreto del bien común. Pero en caso de la regulación, esa objetividad se mide como independencia, o tanto mejor, como neutralidad: la regulación debe responder a razones económicas objetivamente valoradas y determinadas por medio de procedimientos abiertos, para evitar regulaciones que, por sesgadas, generen efectos adversos en la economía.³⁴

dado lugar a estudiar al Estado regulador, esto es, aquél que interviene en la economía a través de la política regulatoria, pero a través de mecanismos orientados por la gobernanza democrática y, por ende, apalancados en mecanismos de participación ciudadana. De ello resultó un creciente interés por estudiar la gestión regulatoria para asegurar que ésta se adecúe a su propósito (pp. 19-23). En la Unión Europea, por ejemplo, se ha aludido a la regulación inteligente.

³³ La gobernanza regulatoria se orienta a maximizar la eficiencia y eficacia de la regulación, a la par de abonar a su legitimidad democrática y con ello, elevar la confianza de los ciudadanos. Esta visión realza la importancia de la coordinación, la cooperación, las consultas públicas y la comunicación (ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO. *Regulatory Policy and Governance: Supporting Economic Growth and Serving the Public Interest*. 2011. pp. 74 y ss.).

³⁴ Por ello, un componente de la política regulatoria es la independencia de los reguladores, definidos como “agencias”, esto es, organizaciones administrativas que aun cuando se adscriben al Poder Ejecutivo y obran bajo el control del Gobierno, gozan de especiales técnicas de la organización administrativa orientadas a preservar su independencia. Esto se traduce en los procedimientos de designación y remoción de sus

Para describir el énfasis cualitativo de la gobernanza regulatoria, se ha empleado la expresión “mejora regulatoria”. Siguiendo a los principios resumidos por la OECD, la expresión alude al permanente proceso de revisión de la regulación para adoptarla a las cambiantes necesidades sociales así, apalancar su efectividad. La mejora regulatoria se orienta, por ello, a incrementar la calidad de la regulación, todo lo cual implica el constante monitoreo del impacto regulatorio.³⁵ Ese proceso continuo de mejoras se traduce en buenas prácticas regulatorias, esto es, lineamientos orientados a incidir en la calidad de la regulación, tal y como ha sido entendido en América Latina.³⁶

La promoción de buenas prácticas regulatorias ha estado especialmente influenciada por tratados internacionales suscritos para la promoción del libre comercio, y que incluyen cláusulas orientadas a la promoción de convergencia y calidad regulatoria.³⁷ De esa manera, en 2011 Chile, Colombia, México y Perú suscribieron la Alianza del Pacífico. En 2015, por medio de la Declaración de Paracas, se aprobó el primer protocolo modificatorio, para incorporar –entre otras reformas– el capítulo 15bis, sobre “mejora regulatoria”. Además, en 2016 diversos países –incluyendo a Chile, México y Perú– suscribieron el Acuerdo de Asociación Transpacífico, o TPP, cuyo capítulo 25 reguló la coherencia regulatoria. El TPP, que nunca entró en vigor, dio lugar a un tratado ampliado suscrito en 2018, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (o CPTPP), el cual incluye a Chile, México y Perú.

Guardando las diferencias, ambos capítulos parten del concepto de mejora regulatoria como la utilización de las buenas prácticas regulatorias (incluyendo las buenas prácticas internacionales), en el proceso de planificación, elaboración, promulgación, implementación y revisión de las medidas regulatorias, con el propósito de alcanzar los “objetivos de política pública nacional”.³⁸ La mejora regulatoria se

máximas autoridades, que restringen el control político del Gobierno e incorporan incluso técnicas de control del Poder Legislativo. Asimismo, la independencia se traduce en técnicas de organización administrativa orientadas a la autarquía, como sucede en materia presupuestaria (ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO. *Regulatory Policy and Governance: Supporting Economic Growth and Serving the Public Interest*. 2011. pp. 82-85). Esto genera problemas de legitimidad, por el déficit democrático de tales agencias, ante lo cual el Derecho Administrativo introduce especiales mecanismos de participación ciudadana, rendición de cuenta y transparencia, incluso, por medio de tecnologías de la información y de la comunicación.

³⁵ ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO. *Guiding Principles for Regulatory Quality and Performance*. 2005.

³⁶ En 2015 la OECD promovió el primer encuentro de diálogos de expertos regulatorios en América Latina, todo lo cual llevó a la creación de Red Latinoamericana de buenas prácticas regulatorias. QUERBACH, Tobías; ARNDT, Christiane. *Política regulatoria en América Latina: Un análisis de la situación actual*. OECD: París, 2016. pp. 32 y ss.

³⁷ En un ámbito mucho más reducido, hay tratados que han fortalecido el principio de transparencia de la regulación, como sucede con el artículo 18 tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.

³⁸ Artículo 15 bis 2. El artículo 25.2 no alude a las buenas prácticas internacionales.

orienta a promover la calidad de la regulación medida en función a su impacto económico, para lo cual –y entre otras medidas– se realiza la importancia de la cooperación regulatoria internacional.³⁹

Más recientemente, el tratado de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos incluyó en su capítulo 28 “buenas prácticas regulatorias”, definidas como los estándares orientados a reforzar la calidad de la regulación, por medio de los principios de transparencia, objetividad, rendición de cuentas y predictibilidad.⁴⁰

En tal sentido uno de los países de América Latina que ha prestado mayor atención a la mejora regulatoria es México. Así, en 2000 se modificó la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para incluir disposiciones en materia de mejora regulatoria, orientadas a incrementar la eficiencia, eficacia y simplificación de las regulaciones y trámites, a cuyo efecto se creó una instancia consultiva y de coordinación, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Posteriormente, y luego de la reforma constitucional de 2017 que incorporó las bases de la mejora regulatoria, en 2018 se dictó la *Ley General de Mejora Regulatoria*, orientada a establecer el marco jurídico de las políticas orientadas a incrementar la efectividad de la regulación, o como le denomina la Ley, a su “perfeccionamiento”. Para este fin, los artículos 7 y 8 enumeran los principios y objetivos de la mejora regulatoria, destacando en este sentido la medición del análisis costo-calidad (esto es, el principio de “mayores beneficios que costos y el máximo beneficio social”, de acuerdo con los principios de eficacia y eficiencia); la proporcionalidad; la promoción de la competitividad, empleo y la libre concurrencia, previniendo barreras al comercio internacional; la ponderación de asimetrías en el cumplimiento regulatorio; la prevención de riesgos; la promoción de la estabilidad regulatoria y, con ello, de la seguridad jurídica; la mejora en la calidad de la regulación, con la definición clara y concreta de sus objetivos; la coherencia entre las regulaciones; la simplificación de la regulación y trámites; el uso de tecnologías de la información y la comunicación; la transparencia y la rendición de cuentas, así como la participación ciudadana y la interacción con el sector privado, fomentando “*una cultura que ponga a las personas como centro de la gestión gubernamental*”.

Es interesante observar que de acuerdo con el artículo 3, sección XV de la Ley, la regulación abarca “cualquier normativa de carácter general” dictada por la Administración Pública (definida en los términos de la sección XIX). Esto es, que la regulación abarca a los actos administrativos normativos. Pero lo cierto es que la Ley también aplica a los actos administrativos individuales, al establecer normas para la mejora del expediente de trámites y servicios (sección IX). Como

³⁹ Artículo 15 bis 2, literal f. El artículo 25 está más enfocado a la coherencia regulatoria, como medio para fortalecer su calidad. Para estos fines, se realiza la coordinación regulatoria internacional (artículo 25.4).

⁴⁰ Artículo 28.2.

sen observa, el concepto de regulación tiene un sentido bastante amplio desde el Derecho Administrativo.

Ahora bien, es dentro de este concepto de mejora regulatoria que se han los introducidos entornos de pruebas regulatorio y los *hub* de innovación.⁴¹ Jurídicamente, los espacios de prueba se traducen en títulos habilitantes que permiten el acceso al mercado para prestar servicios tecnofinancieros de manera limitada, a los fines de experimentar a partir de la interacción con los usuarios, siempre bajo la supervisión de la Administración, que, en todo caso, también participa en esta experimentación.

Centrándonos en los espacios regulatorios de experimentación, observamos que, en México, la *Ley para regular las instituciones de tecnología financiera*, regula a dos tipos de operadores económicos, a saber, las instituciones de financiamiento colectivo y las instituciones de fondos de pago electrónico, que requieren de la correspondiente autorización.⁴² Ahora bien, si algún operador económico desea ofrecer servicios novedosos en fase de experimentación, puede solicitar una autorización de modelos novedosos. Esta autorización será temporal, y fijará las condiciones dentro de las cuales los servicios podrán ser ofrecidos, incluyendo en especial las políticas de análisis de riesgos, y las reglas de responsabilidad civil. Asimismo, similares autorizaciones pueden ser emitidas a operadores financieros autorizados, para prestar servicios novedosos y experimentales, no cubiertos por la autorización general otorgada.⁴³

En Perú, el Reglamento para la realización temporal de actividades en modelos novedosos prevé una autorización temporal y limitada para ofrecer servicios novedosos y experimentales, incluyendo pruebas piloto, todo lo cual estará acompañado de la “flexibilización de requerimientos normativos” de acuerdo con la Superintendencia de Banca, Seguros y Administraciones Privadas de Fondo de Pensiones.⁴⁴ De manera más amplia, en Colombia, el espacio controlado de pruebas ha sido definido como el “conjunto de normas, procedimientos, planes, condiciones, requisitos y requerimientos prudenciales que permite probar desarrollos tecnológicos innovadores en la prestación de actividades propias de las entidades

⁴¹ Los *hub* de innovación son plataformas que fomentan el diálogo entre la Administración y los operadores económicos, mientras que los espacios de prueba se basan en títulos habilitantes autorizatorios que permiten a los operadores ofrecer temporalmente servicios innovadores. BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. *FINTECH en América Latina y el Caribe*. Un ecosistema consolidado para la recuperación. Washington D.C., 2022. pp. 136 y ss.

⁴² VILLANUEVA, Ana. Fomento a la innovación en un entorno seguro: la autorización de modelos regulatorios novedosos o *regulatory sandbox* en México. In: ROBLES, Rocío (ed). *Ley para regular las instituciones de tecnología financiera Contexto, contenido e implicaciones*. Ciudad de México: Tirant lo Blanch, 2020. pp. 499 y ss.

⁴³ Artículos 80 y siguiente.

⁴⁴ Artículos 4 y 12.

vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia".⁴⁵ La finalidad de esos espacios –como se afirma en Brasil– es fomentar la innovación, favorecer la confianza en los operadores, reducir los costos y tiempos de maduración para la prestación de servicios novedosos, aumento de la competitividad, y fomento de la inclusión financiera.⁴⁶

El punto en común es que estos espacios parten de una autorización que genera condiciones institucionales adecuadas de seguridad jurídica, que al mismo tiempo, mediante reglas más flexibles a aquellas que rigen a las autorizaciones ordinarias, puedan prestar servicios financieros de manera temporal y limitada, para experimentar nuevas tecnologías que requiriere un proceso de autodescubrimiento y de la interacción entre la Administración, los operadores y los usuarios.⁴⁷ Esto implica que estos entornos de prueba restringen la libertad de empresa, todo lo cual pasa por cumplir con las garantías jurídicas de ese derecho, incluyendo el principio de legalidad.⁴⁸

En especial, y desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la regulación de los servicios tecnofinancieros a través de espacios regulatorios para la experimentación debe preservar los derechos humanos de los usuarios, recordando en este sentido que la tutela de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales se basa en la figura del Estado garante y, por ende, en la responsabilidad del Estado por indebida supervisión. Este es otro elemento de riesgo, pues una tutela indebida de estos derechos puede incrementar los costos regulatorios y frenar la innovación, mientras que una protección indebida puede colocar en riesgo a los usuarios del sistema financiero.⁴⁹

En todo caso, como se aprobó en la novena cumbre de las Américas celebrada en 2022, las buenas prácticas regulatorias "*redundan en beneficio de nuestros ciudadanos y nuestras economías y reconociendo la utilidad de adoptar estas prácticas en nuestros procesos de regulación y en todo el ciclo de vida de las regulaciones*". Por lo anterior, la regulación de los servicios tecnofinancieros no debe valorarse como una restricción excepcional e inconveniente. No, al menos, si

⁴⁵ Artículo 2.35.7.1, del Decreto N° 1.234, que modifica al Decreto N° 2.555, sobre las normas en materia del sector financiero, asegurador y de mercado de valores.

⁴⁶ Artículo 1, Resolución N° 29, de 11 de mayo de 2021, que establece las reglas para la constitución y operación de un entorno regulatorio experimental.

⁴⁷ El Banco Interamericano de Desarrollo ha preparado una base de datos de las regulaciones dictadas en esta materia: <<https://www.iadb.org/en/sector/initiatives/digital-finance-innovation/fintechregmap>>.

⁴⁸ Como ha observado en Venezuela. Cfr.: ABACHE, Serviliano. La regulación de las FINTECH en Venezuela. *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello*, n. 75, Caracas, 2021, pp. 101 y ss. Véase igualmente a BADELL BENÍTEZ, Nicolás. Regulación administrativa de las empresas Fintech. Especial referencia al Derecho Venezolano. In: URDANETA, Gustavo, et al. (ed). *Libro Homenaje a Jesús Caballero Ortiz*. Tomo II. Caracas: Academia de Ciencias Políticas y Sociales-FUNEDA, 2022. pp. 715 y ss.

⁴⁹ Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso *Vera Rojas y otros vs. Chile*, sentencia de 1 de octubre de 2021, Serie C N°439, párrafo 124.

las instituciones de Derecho Administrativo –el filtro de las políticas públicas– logran adecuarse para que la regulación de los servicios tecnofinancieros experimentales, lejos de ser un obstáculo a la innovación, sea un elemento catalizador de la innovación. Esto requiere construir capacidades regulatorias en las Administraciones Públicas desde la complementariedad del sector público y el sector privado.⁵⁰ Esto es, es necesario –aun cuando pueda resultar un lugar común– un nuevo Derecho Administrativo, en el cual la Administración Pública, al servicio del bien común, facilite la innovación.

4 Conclusiones

El Derecho Administrativo en América Latina, tradicionalmente, abordó la intervención de la Administración en la economía a través los cauces de la actividad administrativa inspirados en el modelo francés. En especial, a través de conceptos tales y como el servicio público y la policía económica, se establecieron cauces de intervención administrativa basados en privilegios y prerrogativas.

Esta visión comenzó a cambiar hacia fines del siglo pasado, cuando se introdujo el concepto de regulación, siguiendo las políticas de liberalización económica resumidas en el llamado Consenso de Washington. Sin embargo, el concepto de regulación fue introducido sin modificar la arquitectura del Derecho Administrativo, de lo cual resultó que ese concepto fue implementado sobre los conceptos tradicionales de servicio público y policía, incluso, bajo la propuesta de estudiar la actividad administrativa de regulación como una nueva modalidad de la actividad administrativa.

Este fue un enfoque cuantitativo, basado en reducir el rol de la regulación a favor de la primacía del mercado. A comienzos del presente siglo este enfoque comenzó a cambiar, por una visión cualitativa, orientada a mejorar la calidad regulatoria. Ha sido este contexto de mejora regulatoria que se ha empleado en la ordenación jurídica de los espacios regulatorios de prueba para favorecer la experimentación en servicios tecnofinancieros.

En los casos examinados en América Latina, estos espacios regulatorios se traducen en autorizaciones que habilitan el ejercicio de la libertad de empresa para prestar específicos servicios financieros en modo experimental, típicamente, basados en nuevas tecnologías. Al tratarse de servicios experimentales, las autorizaciones limitan el alcance de estos servicios y establecen especiales condiciones de protección a los usuarios. Pero al mismo tiempo, estas autorizaciones flexibilizan

⁵⁰ FARIAS, Pedro, et al. *¿Preparados para regular? Lecciones y desafíos de la regulación en América Latina*. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo, 2022. pp. 18 y ss.

los requisitos generales que rigen la prestación de servicios financieros, para de esa manera fomentar y favorecer la experimentación y la innovación.

Tras esta figura subyacen políticas públicas regulatorias en las cuales el rol del Estado no se limita a paliar fallos de mercado, sino a construir mercados, mediante un proceso de aprendizaje basado en la colaboración con el sector privado. Pero en América Latina, estas políticas pasan por el filtro del Derecho Administrativo, que, al responder al modelo francés, no está debidamente diseñado para favorecer la experimentación y la innovación.

Por lo anterior, es necesario un nuevo Derecho Administrativo que preste menos atención a los privilegios y prerrogativas exorbitantes, y se enfoque más en el rol de la Administración Pública como catalizador de la innovación. Este nuevo Derecho Administrativo debe dejar atrás la visión antagonista entre el sector público y privado –presente en figuras como el servicio público– y partir de un nuevo paradigma: el sector público y privado se complementan. Esta nueva visión hará, del Derecho Administrativo, un instrumento que facilite la innovación financiera y, con ello, contribuya a la inclusión financiera, como paso necesario para abatir la desigualdad en la región, todo ello, de conformidad con los estándares que derivan del Derecho Administrativo Interamericano.

Referencias

- ABACHE, Serviliano. La regulación de las FINTECH en Venezuela. *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello*, n. 75, Caracas, 2021.
- ALEXANDER, Kern. *Principles of Banking Regulation*. Oxford: Oxford University Press, 2019.
- ALLEN, Hilary. Regulatory Sandboxes. *GEO. Wash. L. REV.*, n. 87, 2019.
- BADELL BENÍTEZ, Nicolás. Regulación administrativa de las empresas Fintech. Especial referencia al Derecho Venezolano. In: URDANETA, Gustavo, et al. (ed). *Libro Homenaje a Jesús Caballero Ortiz*. Tomo II. Caracas: Academia de Ciencias Políticas y Sociales-FUNEDA, 2022.
- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. *FINTECH en América Latina y el Caribe*. Un ecosistema consolidado para la recuperación. Washington D.C., 2022.
- BIJKERK, Werner. El impacto de la tecnología al mercado financiero y sus desafíos regulatorios. In: ZUNZUNEGUI, Fernando (ed), *Regulación financiera y FinTech*. Navarra: Aranzadi, 2019.
- CASSAGNE, Juan Carlos. El servicio público. In: RODRÍGUEZ-ARANA, Jaime; RODRÍGUEZ, Libardo (Directores). *Curso de Derecho Administrativo iberoamericano*. Madrid: Editorial Comares-INAP, 2015.
- COMITÉ DE SUPERVISIÓN BANCARIA DE BASILEA. *Buenas prácticas*. Implicaciones de los avances en tecnofinanzas (fintech) para los bancos y los supervisores bancarios. 2018.
- DARBELLAY, Aline. Conclusion to Data Governance in AI, FinTech and LegalTech: Law and Regulation in the Financial Sector. In: LEE, Joseph; DARBELLAY, Aline (ed.). *Data Governance in AI, FinTech and LegalTech Law and Regulation in the Financial Sector*. Northampton: Elgar Practical Guides, 2022.
- FARÍAS, Pedro, et al. *¿Preparados para regular?* Lecciones y desafíos de la regulación en América Latina. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo, 2022.

- FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY. *Regulatory sandbox*. Noviembre de 2015.
- HAUSMANN, Ricardo, et al. Reconfiguring Industrial Policy: A Framework with an Application to South Africa. *CID Working Paper N° 168*, Center for International Development at Harvard University, 2007.
- HAUSMANN, Ricardo. Structural Transformation and Economic Growth in Latin America. In: *The Oxford Handbook of Latin American Economics*. Oxford Handbooks in Economics. Oxford: Oxford University Press, 2011.
- HERNÁNDEZ G., José Ignacio, *Derecho Administrativo y Regulación Económica*, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2006.
- HERNÁNDEZ G., José Ignacio. Servicio público y regulación económica: una perspectiva desde la América española. In: MARTÍNEZ, Juan Miguel de la Cuétara. *Derecho administrativo y regulación económica. Liber amicorum profesor Doctor Gaspar Ariño Ortiz*. Madrid: La Ley, 2011.
- HERNÁNDEZ G., José Ignacio. Transformación digital y empleo público. *Revista de Derecho Funcional*, n. 28, Caracas, 2022.
- HERNÁNDEZ G., José Ignacio. *Lecciones de Procedimiento Administrativo*. Caracas: FUNEDA, 2011.
- HO HEE JUNG, John. RegTech and SupTech: the future of compliance, In: *FinTech: law and regulation*, Northampton: Elgar Practical Guides, 2021.
- MADIR, Jelena. Introduction-What is Fintech? In: MADIR, Jelena (ed). *FinTech: law and regulation*, Northampton: Elgar Practical Guides, 2021.
- MAGNUSON, William. Regulating fintech, *VAND. L. REV.*, n. 71, 2018.
- MAZZUCATO, Marianna. *Transformational change in Latin America and the Caribbean. A mission-oriented approach*. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): 2022.
- MORENO CASTILLO, Luis Ferney. *Teoría de la regulación*. Hacia un Derecho Administrativo de la Regulación. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2019.
- FERRANDIS, Carlos Muñoz. *Fintech Sandboxes and Regulatory Interoperability*. Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford. 14 de abril de 2021. Tomado de: <<https://law.stanford.edu/2021/04/14/fintech-sandboxes-and-regulatory-interoperability/>>.
- NORTH, Douglass. *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press, 1999.
- ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO. *Guiding Principles for Regulatory Quality and Performance*. 2005.
- ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO. *Regulatory Policy and Governance: Supporting Economic Growth and Serving the Public Interest*. 2011.
- QUERBACH, Tobías; ARNDT, Christiane. *Política regulatoria en América Latina: Un análisis de la situación actual*. OECD: París, 2016.
- SHERIDAN, Iain. *Financial Regulation and Technology. A Legal and Compliance Guide*. Northampton: Elgar Practical Guides, 2022.
- SINGER Joseph. *No freedom without regulation: the hidden lesson of the subprime crisis*. New Haven: Yale University Press, 2015.
- VILLAFUERTE MENDOZA, José. ¿Podemos regular las FINTECH? Desafíos y propuestas. *THÉMIS-Revista de Derecho*, n. 79, Lima, 2021.

VILLANUEVA, Ana. Fomento a la innovación en un entorno seguro: la autorización de modelos regulatorios novedosos o *regulatory sandbox* en México. In: ROBLES, Rocío (ed). *Ley para regular las instituciones de tecnología financiera Contexto, contenido e implicaciones*. Ciudad de México: Tirant lo Blanch, 2020.

ZETZSCHE, Dirk A., et al. Regulating a Revolution: From Regulatory Sandboxes to Smart Regulation. *FORDHAM J. CORP. & FIN. L.*, n. 23, 2017.

Informação bibliográfica deste texto, conforme a NBR 6023:2018 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):

HERNÁNDEZ G., José Ignacio. Sandboxes y FinTech en el Derecho Administrativo Económico en América Latina. *International Journal of Digital Law*, Belo Horizonte, ano 5, n. 1, p. 57-78, jan./abr. 2024. DOI: 10.47975/digital.law.vol.5.n.1.hernandez.

Sobre a Revista

IJDL – INTERNATIONAL JOURNAL OF DIGITAL LAW

Objetivo

O International Journal of Digital Law é um periódico científico eletrônico de acesso aberto e periodicidade quadrimestral promovido pelo **Núcleo de Pesquisas em Políticas Públicas e Desenvolvimento Humano (NUPED)**, do Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná.

O Conselho Editorial é composto por renomados professores vinculados a instituições de ensino superior do Brasil, Argentina, Austrália, Colômbia, Espanha, Egito, França, Holanda e Índia. A linha editorial segue o eixo das atividades de pesquisa do NUPED, um grupo inscrito no diretório do CNPq e filiado à **Rede de Pesquisa em Direito Administrativo Social (REDAS)**. Seu enfoque é o estudo crítico das instituições jurídico-políticas típicas do Estado de Direito, notadamente as voltadas à inovação e ao desenvolvimento humano por intermédio da revolução digital.

Linha Editorial

A linha editorial segue o eixo de concentração do **NUPED – PPGD/PUCPR** intitulada “**Direito Econômico e Desenvolvimento**”. Por sua vez, a área congrega duas importantes linhas de pesquisa: 1. **Estado, Economia e Desenvolvimento** e 2. **Direitos Sociais, Globalização e Desenvolvimento**. A revista dará destaque a este marco teórico. Entretanto, transversalmente ao tema da economia, do desenvolvimento, da globalização e dos direitos sociais, as palavras-chave que melhor definem o escopo da revista implicam a tratativa de temas como: acesso à informação, *big data*, *blockchain*, cidades inteligentes, contratos inteligentes, *crowdsourcing*, cibercrimes, democracia digital, direito à privacidade, direitos fundamentais, *e-business*, economia digital, educação digital, eficiência administrativa, *e-government*, *fake news*, *gig economy*, globalização, inclusão digital, infraestrutura, inovação, inteligência artificial, interesse público, internet, internet das coisas, jurimetria, *lawfare*, novas tecnologias, perfilamento digital, pesquisa em multi-meios, processo administrativo eletrônico, proteção de dados, regulação administrativa, regulação econômica, risco, serviços públicos, sistemas de informação, sociedade da informação, transparência governamental e telecomunicações.

Double blind peer review

A publicação dos artigos submete-se ao procedimento *double blind peer review*. Os trabalhos são remetidos sem identificação de autoria a dois pareceristas *ad hoc* portadores de título de doutor, todos eles exógenos à instituição promotora da revista (PUCPR). Os pareceristas são, portanto, sempre pesquisadores vinculados a renomadas instituições de ensino superior nacionais e estrangeiras.

Cobertura temática (classificação do CNPq)

GRANDE: Ciências Sociais Aplicadas (6.00.00.00-7)/Área: Direito (6.01.00.00-1)/
Subárea: Direitos Especiais (6.01.04.00-7)

GRANDE: Ciências Sociais Aplicadas (6.00.00.00-7)/Área: Ciência da Informação
(6.07.00.00-9)/Subárea: Teoria da Informação (6.07.01.00-5)

GRANDE: Ciências Exatas e da Terra (1.00.00.00-3)/Área: Ciência da Computação
1.03.00.00-7/Subárea: Sistemas de Computação (1.03.04.00-2)

Diretrizes para Autores

1. Submissão de artigos

As propostas de artigos para publicação na *International Journal of Digital Law* deverão ser enviadas através do sistema eletrônico de submissões (gratuitamente), por meio de cadastro no Sistema Eletrônico e acesso mediante login e senha a ser realizado no [site](#). Não serão aceitas propostas enviadas por e-mail. A revista reserva-se o direito de aceitar ou rejeitar qualquer original recebido, de acordo com as recomendações do seu corpo editorial, inclusive por inadequação da temática do artigo ao perfil editorial da revista, como também o direito de propor eventuais alterações.

2. Qualificação dos autores

Ao menos um dos autores do artigo deverá possuir o título de Doutor (Dr.), Doctor of Juridical Science (J.S.D. ou S.J.D.), Doctor juris (Dr. iur. ou Dr. jur.), Doctor of Philosophy (Ph.D.) ou Legum Doctor (LL.D.). A exigência poderá ser relativizada, nunca extrapolando o percentual de 30% por edição, em casos excepcionais de: (i) artigos de autores afiliados a instituições estrangeiras; (ii) artigos escritos em inglês.

3. Ineditismo e exclusividade

Os textos para publicação na *International Journal of Digital Law* deverão ser inéditos e para publicação exclusiva, salvo no caso de artigos em língua estrangeira que tenham sido publicados fora do país. Uma vez publicados nesta revista, também poderão sê-lo em livros e coletâneas, desde que citada a publicação original. Roga-se aos autores o compromisso de não publicação em outras revistas e periódicos, bem como de que as propostas de artigo não se encontrem postulados de forma simultânea em outras revistas ou órgãos editoriais.

4. Idiomas

Podem ser submetidos artigos redigidos em Português, Espanhol ou Inglês.

5. Cadastro dos metadados no sistema eletrônico de submissões

5.1. No momento da submissão do artigo no sistema eletrônico, os campos dos metadados deverão ser preenchidos obrigatoriamente de acordo com estas diretrizes, sob pena de rejeição liminar da submissão.

5.2. Autores

5.2.1. Nome/Nome do Meio/Sobrenome: indicação do nome completo do(s) autor(es) apenas com as iniciais de cada nome em caixa alta. Em caso de artigos em coautoria, os nomes de todos os coautores devem ser inseridos no sistema na ordem que deverá constar no momento da publicação.

5.2.2. E-mail: indicação do e-mail do(s) autor(es) para contato, que será obrigatoriamente divulgado na versão publicada do artigo.

5.2.3. ORCID iD: indicação do número de identificação ORCID (para maiores informações [clique aqui](#)). O identificador ORCID pode ser obtido no [registro ORCID](#). Você deve aceitar os padrões para apresentação de iD ORCID e incluir a URL completa; por exemplo: <https://orcid.org/0000-0003-1781-1726>.

5.2.4. URL: link para o currículo completo do autor. No caso de autores brasileiros, deve ser indicado o link para o Currículo Lattes.

5.2.5. Instituição/Afiliação: indicação da sua principal afiliação institucional ou das duas principais, caso o vínculo com ambas possua a mesma importância (instituição à qual encontra-se vinculado como docente ou discente, ou, caso não seja docente ou discente, a instituição onde foi obtido o seu maior título acadêmico, como doutorado, mestrado, especialização etc.). O nome da instituição deverá constar por extenso e na língua original da instituição (ou em inglês quando a escrita não for latina), seguida da indicação do país de origem da instituição entre parênteses. Caso o autor seja docente e esteja cursando mestrado ou doutorado em outra instituição, a afiliação principal será a da instituição na qual o autor figura como mestrando ou doutorando.

5.2.6. País: indicação do país da principal afiliação institucional do autor.

5.2.7. Resumo da biografia: indicação do mini currículo, iniciando com a indicação da instituição onde figura como docente, seguida de cidade, sigla do Estado e país entre parênteses, indicação das titulações acadêmicas (começando pela mais elevada), outros vínculos com associações científicas, profissão etc.

5.3. Título e Resumo

5.3.1. Título: título no idioma do artigo, com apenas a primeira letra da sentença em maiúscula.

5.3.2. Resumo: resumo no idioma do artigo, sem parágrafo ou citações e referências, com até 200 palavras.

5.4. Indexação

5.4.1. Palavras-chave: indicação de 5 palavras-chave no idioma do artigo (em letras minúsculas e separadas por ponto vírgula).

5.4.2. Idioma: indicar a sigla correspondente ao idioma do artigo (Português=pt; English=en; Español=es).

5.5. Contribuidores e Agências de fomento: os artigos resultantes de projetos de pesquisa financiados deverão indicar neste campo a fonte de financiamento.

5.6. Referências: inserir a lista completa de referências citadas no artigo, dando um espaço entre cada uma delas.

6. Apresentação do texto e elementos pré-textuais

6.1. Recomenda-se que o trabalho tenha entre 15 e 30 páginas (tamanho A4 – 21 cm x 29,7 cm), compreendendo a introdução, desenvolvimento, conclusão (não necessariamente com esses títulos) e uma lista de referências bibliográficas.

6.2. As margens utilizadas deverão ser: esquerda e superior de 3 cm e direita e inferior de 2 cm.

6.3. No corpo do texto deverá ser utilizada Fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1,5 cm e espaçamento de 0 pt (pontos) antes e depois dos parágrafos.

6.4. Nas notas de rodapé deverá ser utilizada Fonte Times New Roman, tamanho 10, espaçamento simples entre linhas.

6.5. No desenvolvimento do texto, os parágrafos deverão conter recuo de 1,5 cm em relação à margem esquerda. Títulos e subtítulos deverão estar alinhados à margem esquerda, sem recuo.

6.6. A estruturação deverá observar a exposta neste item 6.6.

- 6.6.1.** Título no idioma do artigo, com apenas a primeira letra da sentença em maiúscula e em itálico, centralizado.
- 6.6.2.** Nos casos de necessidade de indicar informações a respeito do artigo (financiamento por agências de fomento, agradecimentos, tradutores do texto etc.), deverá ser inserida uma nota de rodapé com um asterisco (e não com número) situada à direita do título no idioma do artigo.
- 6.6.3.** Título em inglês, com apenas a primeira letra da sentença em maiúscula, em itálico e centralizado. No caso de artigos redigidos em inglês, este elemento deverá ser substituído pelo título em português.
- 6.6.4.** O artigo não deve incluir os nomes do(s) autor(es). As informações, para fins de publicação, serão retiradas dos metadados inseridos pelo(s) autor(es) no sistema eletrônico da revista no momento da submissão.
- 6.6.5.** Resumo no idioma do artigo (fonte Times New Roman 12, espaçamento entre linhas simples, sem parágrafo ou citações e referências, com até 200 palavras), antecedido da palavra “Resumo” escrita no idioma do artigo.
- 6.6.6.** Indicação de 6 palavras-chave no idioma do artigo (em letras minúsculas e separadas por ponto vírgula), antecidas da expressão “Palavras-chave” redigida no idioma do artigo.
- 6.6.7.** Resumo em inglês (Fonte Times New Roman 12, espaçamento entre linhas simples, sem parágrafo ou citações e referências, com até 200 palavras), antecedido da palavra “Abstract”. No caso de artigos redigidos em inglês, este elemento deverá ser substituído pelo resumo em português.
- 6.6.8.** Indicação de seis palavras-chave em inglês (em letras minúsculas e separadas por ponto e vírgula), antecidas da expressão “Keywords”. No caso de artigos redigidos em inglês, este elemento deverá ser substituído pelas palavras-chave em português.
- 6.6.9.** Sumário com a identificação dos títulos das seções e das subseções, com numeração progressiva, separados por ponto vírgula, sequencialmente e em parágrafo único.
- 6.6.10.** Desenvolvimento do trabalho científico: a numeração progressiva, em números arábicos, deve ser utilizada para evidenciar a sistematização do conteúdo do trabalho.
- 6.6.11.** Lista das referências bibliográficas efetivamente utilizadas no artigo, ao final do trabalho, separadas por um espaço simples, alinhadas à margem esquerda (sem recuo).
- 6.6.12.** Aplicam-se, para os demais aspectos de formatação, as normas técnicas brasileiras (ABNT NBR 10520:2002 e 14724:2011).
- 6.6.13.** No caso de artigos com 4 ou mais autores, é necessário incluir uma nota de rodapé indicando qual foi a contribuição de cada um.
- 6.7.** Todo destaque que se queira dar ao texto deve ser feito com o uso de itálico, ficando vedada a utilização de negrito, sublinhado ou caixa alta para fins de dar destaque ao texto.
- 6.8.** Figuras e tabelas devem estar inseridas no texto, e não no final do documento na forma de anexos.

7. Metodologia científica

7.1. As referências dos livros, capítulos de obras coletivas, artigos, teses, dissertações e monografias de conclusão de curso de autores citados ou utilizados como base

para a redação do texto devem constar em nota de rodapé, com todas as informações do texto, em observância às normas técnicas brasileiras (ABNT NBR 6023:2018), e, especialmente, com a indicação da página da qual se tirou a informação apresentada no texto logo após a referência.

7.1.1. O destaque dado ao título dos livros (ou revistas) citados deverá constar em itálico, ficando vedada a utilização de negrito.

7.1.2. Os artigos redigidos com citação no formato AUTOR-DATA não serão aceitos para publicação, somente o sistema de chamadas numérico exposto nas notas de rodapé.

7.1.3. As referências deverão constar da seguinte forma:

7.1.3.1. Livros:

SOBRENOME, Nome. *Título da obra em itálico*: subtítulo sem itálico. número da edição. Cidade: Editora, ano.

Exemplo:

KEEN, Andrew. *Vertigem digital*: por que as redes sociais estão nos dividindo, diminuindo e desorientando. Trad. Alexandre Martins, Rio de Janeiro: Zahar, 2012. 254p.

7.1.3.2. Capítulos de livros coletivos:

SOBRENOME, Nome. Título do capítulo sem itálico. In: SOBRENOME DO 1º ORGANIZADOR, Nome do organizador; SOBRENOME DO 2º ORGANIZADOR, Nome do 2º organizador e assim sucessivamente, separados por ponto vírgula (Org. ou Coord.). *Título da obra ou coletânea em itálico*: subtítulo sem itálico. número da edição. Cidade: Editora, ano. página inicial-página final [antecedidas de “p.”].

Exemplo:

DOTTA, Alexandre Godoy. Derechos de la Población LGBT+ en Brasil: Vulnerabilidad Social entre Avances y Retrocesos. In: BRAVO, Álvaro Sánches; CASIMIRO, Ligia Melo de; GABARDO, Emerson. (Org.). *Estado Social Y Derechos Fundamentales en Tiempos de Retroceso*. Sevilha: Ponto Rojo, 2019. p. 203-228.

7.1.3.3. Artigos em revistas:

SOBRENOME, Nome. Título do artigo sem itálico. *Título da Revista em itálico*, cidade, volume, número, página inicial-página final [antecedidas de “p.”], meses da publicação [abreviados com as três primeiras letras do mês seguidas de ponto e separados por barra]. ano.

Exemplo:

GABARDO, Emerson; SAIKALI, Lucas Bossoni. A prescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário em razão de atos de improbidade administrativa. *Revista Jurídica – Unicuritiba*, Curitiba, v. 1, p. 514-543, 2018.

7.1.3.4. Teses de Titularidade, Livre-Docência, Doutorado, Dissertações de Mestrado, Monografias de Conclusão de Curso de Graduação e Pós-Graduação:

SOBRENOME, Nome. *Título do trabalho em itálico*: subtítulo sem itálico. Cidade, ano. número de folhas seguido de “f”. Modalidade do trabalho (Grau obtido com a defesa) – Órgão perante o qual o trabalho foi defendido, Nome da instituição.

Exemplo:

SANTOS, Fábio de Sousa. *Análise Comparada da Competição na Contratação Pública Brasileira e Estadunidense*. Curitiba, 2018. 134f. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Curitiba: 2018.

7.1.3.5 DOI – Digital object identifier: Caso o documento consultado na pesquisa tenha o número de DOI recomenda-se a inclusão, de modo complementar, do número após o término de cada referência.

Exemplo:

DOTTA, Alexandre Godoy. Public policies for the assessment of quality of the Brazilian higher education system. *Revista de Investigações Constitucionais*, Curitiba, v. 3, p. 53-69, 2016. DOI. [10.5380/rinc.v3i3.49033](https://doi.org/10.5380/rinc.v3i3.49033).

7.1.3.6. Documentos em meio eletrônico: Documentos extraídos do meio eletrônico deverão apresentar após o término de cada referência o local da rede onde foi encontrado e apresentado da seguinte maneira.

Exemplo:

IJDL. International Journal of Digital Law. *Regras para a submissão de artigos*. Disponível em: <https://journal.nuped.com.br/index.php/revista/about/submissions>. Acesso em: 12 fev. 2020.

7.1.4. Os elementos das referências devem observar o seguinte padrão:

7.1.4.1. Autor: SOBRENOME em maiúsculas, vírgula, Nome com as iniciais em maiúsculas, seguido de ponto final.

7.1.4.2. Edição: deve ser incluída a informação somente a partir da segunda edição, sem ordinal, seguido de ponto e “ed.”. Exemplo: 2. ed.

7.1.4.3. Ano: grafado com algarismos arábicos, sem ponto no milhar, antecedido de vírgula e seguido de ponto.

7.1.5. Nos casos em que for absolutamente impossível obter alguma das informações acima, a ausência deverá ser suprida da seguinte forma:

7.1.5.1. Ausência de cidade: substituir por [S.l.].

7.1.5.2. Ausência de editora: substituir por [s.n.].

7.1.5.3. Ausência de ano: indicar entre colchetes o ano aproximado, seguido de ponto de interrogação. Exemplo: [1998?].

7.2. As citações (palavras, expressões, períodos) deverão ser cuidadosamente conferidas aos textos originais.

7.2.1. Citações diretas devem seguir o seguinte padrão de registro: transcrição com até quatro linhas devem constar do corpo do texto, com letra e espaçamento normais, e estar entre aspas.

7.2.2. Recomenda-se fortemente que citações textuais longas (mais de quatro linhas) não sejam utilizadas. Entretanto, se imprescindíveis, deverão constituir um parágrafo independente, com recuo de 1,5 cm em relação à margem esquerda (alinhamento justificado), utilizando-se espaçamento entre linhas simples e tamanho da fonte 10. Neste caso, aspas não devem ser utilizadas.

7.2.3. Fica vedado o uso do op. cit., loc. cit., ibidem e idem nas notas bibliográficas, que deverão ser substituídas pela referência completa, por extenso.

7.2.4. Para menção de autores no corpo do texto, fica vedada sua utilização em caixa alta (ex.: para Nome SOBRENOME...). Nestes casos todas as menções devem ser feitas apenas com a primeira letra maiúscula (ex.: para Nome Sobrenome...).

8. Redação

8.1. Os textos devem ser revisados, além de terem sua linguagem adequada a uma publicação editorial científica.

8.2. No caso de artigos redigidos na língua portuguesa, a escrita deve obedecer às regras ortográficas em vigor desde a promulgação do ACORDO ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA PORTUGUESA, a partir de 1º de janeiro de 2009.

8.3. As citações de textos anteriores ao ACORDO devem respeitar a ortografia original.

9. Artigos resultantes de pesquisas financiadas

Os artigos resultantes de projetos de pesquisa financiados deverão indicar em nota de rodapé, situada ao final do título do artigo no idioma do texto, a informação relativa ao financiamento da pesquisa.

10. Declaração de direitos autorais

Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:

10.1. Não serão devidos direitos autorais ou qualquer outra remuneração pela publicação dos trabalhos.

10.2. Autores mantêm os direitos autorais e concedem à *IJD* o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a [Licença Creative Commons Attribution](#) que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e publicação inicial nesta revista. Ainda, em virtude de aparecerem nesta revista de acesso público, os artigos são de uso gratuito, com atribuições próprias, com aplicações educacionais e não comerciais.

10.3. Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho online (ex.: em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer ponto antes ou durante o processo editorial, já que isso pode gerar alterações produtivas, bem como aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado (ver [O Efeito do Acesso Livre](#)).

11. Responsabilidade dos autores

11.1. Autores são responsáveis pelo conteúdo publicado, comprometendo-se, assim, a participar ativamente da discussão dos resultados de sua pesquisa científica, bem como do processo de revisão e aprovação da versão final do trabalho.

11.2. Autores são responsáveis pela condução, resultados e validade de toda investigação científica.

11.3. Autores devem noticiar a revista sobre qualquer conflito de interesse.

11.4. As opiniões emitidas pelos autores dos artigos são de sua exclusiva responsabilidade.

11.5. Ao submeter o artigo, o autor atesta que todas as afirmações contidas no manuscrito são verdadeiras ou baseadas em pesquisa com razoável exatidão.

12. Conflito de interesses

A confiabilidade pública no processo de revisão por pares e a credibilidade de artigos publicados dependem em parte de como os conflitos de interesses são administrados durante a redação, revisão por pares e tomada de decisões pelos editores.

12.1. É obrigatório que o autor do manuscrito declare a existência ou não de conflitos de interesse. Mesmo julgando não haver conflitos de interesse, o autor deve declarar essa informação no ato de submissão do artigo, marcando esse campo específico.

12.2. Conflitos de interesses podem surgir quando autores, pareceristas ou editores possuem interesses que, aparentes ou não, podem influenciar a elaboração ou avaliação

de manuscritos. O conflito de interesses pode ser de natureza pessoal, comercial, política, acadêmica ou financeira.

12.3. Quando os autores submetem um manuscrito, eles são responsáveis por reconhecer e revelar conflitos financeiros ou de outra natureza que possam ter influenciado seu trabalho.

12.4. Os autores devem reconhecer no manuscrito todo o apoio financeiro para o trabalho e outras conexões financeiras ou pessoais com relação à pesquisa. As contribuições de pessoas que são mencionadas nos agradecimentos por sua assistência na pesquisa devem ser descritas, e seu consentimento para publicação deve ser documentado.

12.5. Manuscritos não serão rejeitados simplesmente por haver um conflito de interesses, mas deverá ser feita uma declaração de que há ou não conflito de interesses.

12.6. Os pareceristas devem, igualmente, revelar aos editores quaisquer conflitos de interesse que poderiam influir em suas opiniões sobre o manuscrito, e devem declarar-se não qualificados para revisar originais específicos se acreditarem que esse procedimento é apropriado. Assim como no caso dos autores, se houver silêncio por parte dos pareceristas sobre conflitos potenciais, isso significará que os conflitos não existem.

12.7. No caso da identificação de conflito de interesse da parte dos pareceristas, o Conselho Editorial encaminhará o manuscrito a outro parecerista *ad hoc*.

12.8. Se os autores não tiverem certeza do que pode constituir um potencial conflito de interesses, devem contatar o Coordenador Editorial da Revista.

12.9. Para os casos em que editores ou algum outro membro publiquem com frequência na Revista, não serão atribuídos tratamentos especiais ou diferenciados. Todos os artigos submetidos serão avaliados através do procedimento *double blind peer review*.

13. Outras informações

13.1. Os trabalhos serão selecionados pelo Coordenador Editorial e pelo Conselho Editorial da Revista, que entrarão em contato com os respectivos autores para confirmar o recebimento dos textos, e em seguida os remeterão para análise de dois pareceristas do Conselho de Pareceristas.

13.2. Os originais recebidos e não publicados não serão devolvidos.

13.3. Asseguram-se aos autores o direito de recurso das decisões editoriais.

13.3.1. Serão concedidos 5 (cinco) dias, contados da data da decisão final do Conselho Editorial.

13.3.2. O arrazoado escrito deverá ser enviado para o e-mail: journal@nuped.com.br.

13.3.3. O recurso será analisado pelo Conselho Editorial no prazo de 30 (trinta) dias.

CONDIÇÕES PARA SUBMISSÕES

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade da submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos autores.

1. A contribuição é original e inédita (salvo em caso de artigos em língua estrangeira publicados no exterior), e não está sendo avaliada para publicação por outra revista; caso contrário, deve-se justificar em “Comentários ao editor”.
2. O arquivo da submissão está em formato Microsoft Word.
3. URLs para as referências foram informadas quando possível.

4. O texto possui entre 15 e 30 páginas (tamanho A4 – 21 cm x 29,7 cm), compreendendo a introdução, desenvolvimento, conclusão (não necessariamente com esses títulos) e uma lista de referências bibliográficas; as margens utilizadas são: esquerda e superior de 3 cm e direita e inferior de 2 cm; no corpo do texto utilizou-se Fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1,5, e espaçamento de 0 pt antes e depois dos parágrafos; nas notas de rodapé utilizou-se Fonte Times New Roman, tamanho 10, espaçamento simples entre linhas; no desenvolvimento do texto, os parágrafos contêm recuo de 1,5 cm em relação à margem esquerda; títulos e subtítulos estão alinhados à margem esquerda, sem recuo; as figuras e tabelas estão inseridas no texto, não no final do documento na forma de anexos.
5. O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos em [Diretrizes para Autores](#), na [página para submissão](#).
6. Em caso de submissão a uma seção com avaliação pelos pares (ex.: artigos), as instruções disponíveis em [Assegurando a avaliação pelos pares cega](#) foram seguidas.
7. O autor declara que, com exceção das citações diretas e indiretas claramente indicadas e referenciadas, este artigo é de sua autoria e, portanto, não contém plágio. Declara, ainda, que está ciente das implicações legais que a utilização de material de terceiros acarreta.
8. O autor declara que participou suficientemente do trabalho para tornar pública sua responsabilidade pelo conteúdo e que todas as afirmações contidas no manuscrito são verdadeiras ou baseadas em pesquisa com razoável exatidão.
9. O autor concorda com a política de responsabilidade estabelecida no item 10. Responsabilidade dos autores das [Diretrizes para Autores](#).

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente para os serviços prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras finalidades ou a terceiros.

Este periódico tem um compromisso com a ética e a qualidade das publicações, seguindo padrões internacionais de publicação científica. Defendemos um comportamento ético de todas as partes envolvidas na publicação em nosso periódico: autores, editor, pareceristas, Equipe Editorial e a Editora. Não aceitamos plágio ou qualquer outro comportamento antiético. Para isso, são seguidas as diretrizes do [2nd World Conference on Research Integrity](#), Singapore, July 22-24, 2010.

Deveres do Editor

- **Decisão de publicação:** o editor é responsável por decidir quais artigos submetidos à revista devem ser publicados. O editor é guiado pelas políticas decididas pelo Conselho Editorial. Essas políticas devem obedecer às exigências legais em vigor sobre difamação, violação de direitos autorais e plágio. Para tomada de decisões o editor pode consultar o Conselho Editorial e os pareceristas.
- **Transparência e respeito:** o editor deve avaliar os manuscritos submetidos sem levar em conta a raça, sexo, a orientação sexual, a crença religiosa, a origem étnica, a nacionalidade ou a filosofia política dos autores.

- **Confidencialidade:** o editor e demais membros da equipe editorial não devem divulgar qualquer informação sobre um manuscrito submetido, a não ser aos pareceristas e os conselheiros editoriais.
- **Divulgação e conflitos de interesse:** O editor não deve utilizar materiais inéditos divulgados em um manuscrito submetido em pesquisas próprias sem o consentimento expresso e por escrito do autor. O editor deve recusar avaliar os manuscritos em que tenha conflitos de interesse por questões competitivas, colaborativas ou outros relacionamentos ou ligações com qualquer um dos autores, empresas ou (possivelmente) instituições ligadas aos manuscritos.
- **Envolvimento e cooperação em investigações:** o editor deve tomar medidas necessárias cabíveis quando foram apresentadas reclamações éticas a respeito de um manuscrito submetido ou artigo publicado.

Deveres dos Pareceristas

- **Contribuição para as decisões editoriais:** a revisão dos pareceristas auxilia o editor na tomada de decisões editoriais e por meio das comunicações com o autor também pode auxiliar o mesmo na melhora do artigo.
- **Pontualidade:** qualquer avaliador de artigo que não se sinta qualificado para analisar o artigo ou sabe que a sua imediata leitura será impossível deve notificar imediatamente o editor.
- **Confidencialidade:** os trabalhos recebidos para análise devem ser tratados como documentos confidenciais. Eles não devem ser mostrados ou discutidos com os outros.
- **Padrões de objetividade:** os pareceres devem ser conduzidos de forma objetiva. Os pareceristas devem expressar seus pontos de vista de maneira clara e apoiados em argumentos.
- **Sobre as fontes:** os pareceristas devem identificar trabalhos publicados relevantes que não foram citados pelos autores. O parecerista deve chamar a atenção do editor sobre qualquer semelhança substancial ou sobreposição entre o manuscrito em questão e qualquer outro *artigo* publicado de que tenha conhecimento pessoal.
- **Divulgação e conflito de interesses:** informações privilegiadas ou ideias obtidas pelo parecerista por meio da leitura dos manuscritos devem ser mantidas em sigilo e não devem utilizadas para proveito pessoal. O parecerista não deve avaliar manuscritos em que tenha conflitos de interesse por questões competitivas, colaborativas ou outros relacionamentos ou ligações com qualquer um dos autores, empresas ou instituições ligadas aos manuscritos.

Deveres dos Autores

- **Normas gerais:** os autores de trabalhos que se referem a pesquisas originais devem apresentar um relato preciso do trabalho realizado, bem como uma discussão objetiva sobre o seu significado. Dados complementares devem ser representados com precisão no artigo. O documento deve conter detalhes suficientes e referências que permitam que outros possam replicar o trabalho. Declarações fraudulentas ou intencionalmente imprecisas constituem um comportamento antiético e são inaceitáveis.

- **Originalidade e plágio:** os autores devem garantir que as obras são inteiramente originais e se eles utilizam o trabalho e/ou textos dos outros que isso seja devidamente citado. Plágio em todas as suas formas constitui um comportamento editorial antiético e é inaceitável.
- **Publicação múltipla ou redundante:** um autor não deve publicar manuscritos que descrevam essencialmente a mesma pesquisa em mais de um periódico. Publicar o mesmo artigo em mais de um periódico sem informar os editores e obter seu consentimento constitui um comportamento editorial antiético e é inaceitável.
- **Sobre as fontes:** o trabalho de outros autores deve sempre ser reconhecido. Os autores devem citar as publicações que foram importantes na determinação da natureza do trabalho relatado. As informações obtidas em particular, como em uma conversa, correspondência, ou discussão com terceiros, não devem ser utilizadas ou relatadas sem a permissão explícita por escrito da fonte. As informações obtidas por meio de serviços confidenciais, tais como arbitragem manuscritos ou pedidos de bolsas, não devem ser utilizadas sem a permissão explícita por escrito do autor do trabalho envolvido nestes serviços.
- **Autoria:** a autoria do trabalho deve ser restrita àqueles que fizeram uma contribuição significativa para a concepção, projeto, execução ou interpretação do estudo relatado. Todos aqueles que fizeram contribuições significativas devem ser listados como coautores. Pessoas que participaram em certos aspectos do projeto de pesquisa devem ser listadas como colaboradores. O autor principal deve garantir que todos os coautores apropriados estejam incluídos no artigo. O autor principal também deve certificar-se que todos os coautores viram e aprovaram a versão final do manuscrito e que concordaram com sua submissão para publicação.
- **Divulgação e conflitos de interesses:** todos os autores devem divulgar no manuscrito qualquer conflito financeiro ou de outra natureza que possa influenciar os resultados ou a interpretação de seu manuscrito. Todas as fontes de apoio financeiro para o projeto devem ser divulgadas.
- **Erros fundamentais em trabalhos publicados:** quando um autor descobre um erro significativo ou imprecisão em seu trabalho publicado é obrigação do autor informar imediatamente o editor da revista ou a Editoria de Periódicos e cooperar com o editor para corrigir o artigo.

Deveres da Editora

Estamos empenhados em garantir que publicidade, reimpressão ou qualquer outra fonte de receita comercial não tenha qualquer impacto ou influência sobre as decisões editoriais.

Nossos artigos são avaliados por pares para garantir a qualidade da publicação científica. Este periódico utiliza o CrossCheck (software antiplágio da CrossRef).

* Esta declaração se baseia nas recomendações da Elsevier e no *Best Practice Guidelines for Journal Editors* do Committee on Publication Ethics – COPE.

Author Guidelines

1. Article Submission

Article propositions for publishing on the International Journal of Digital Law must be sent through the electronic submission system (free of cost) and access through login and password. Propositions sent by e-mail will not be accepted. The Journal has the right to accept or reject any originals received, according to its Editorial Board's recommendations, including the inadequacy of the article's theme to the journal's editorial profile, as well as the right to propose modifications.

2. Author Qualification

At least one of the authors must own either a PhD degree or a Doctor of Juridical Science (J.S.D. or S.J.D), Doctor juris (Dr. iur. or Dr. jur.), Doctor of Philosophy (Ph.D.) ou Legum Doctor (LL.D.) degree. This requirement can be relativized, never exceeding 30% of the articles per edition, in exceptional cases of: (i) authors affiliated to foreign institutions; (ii) articles written in English.

3. Originality and exclusivity

Articles for publication in the International Journal of Digital Law must be original and exclusive, except in case of articles written in a foreign language and published outside Brazil. After the publication of the article in this journal, it can also be published in books and compilations, as long as the original publication is mentioned. We ask the authors to commit to not publish the article in other journals or reviews, as well as not to submit it to other journals at the same time.

4. Languages

Articles can be submitted in English, Portuguese, and Spanish.

5. Registration of the metadata in the electronic submission system

5.1. At the time of submission of the article to the electronic system, the metadata fields must be filled in according to these guidelines, under penalty of preliminary rejection of the submission.

5.2. Authors

5.2.1. *First name/Middle name/Last name:* indication of the full name of the author(s) with only the initials of each name in capital letter. In case of articles in co-authorship, the names of all coauthors must be inserted in the system in the order that should appear at the time of publication.

5.2.2. *E-mail:* indication of the e-mail address of the author(s) for contact, which will mandatorily appear in the published version of the article.

5.2.3. *ORCID iD:* indication of the number of the author's ORCID identifier (for further information [click here](#)). The ORCID identifier can be obtained in [ORCID register](#). Authors must have to accept the patterns for presentation of ORCID iD and include the full URL (e.g.: <https://orcid.org/0000-0003-1781-1726>).

5.2.4. *URL:* link to the author's full curriculum. In the case of Brazilian authors, the link to the Lattes Curriculum should be indicated.

5.2.5. Affiliation: indication of the author's main institutional affiliation (or two main affiliations if both of the links with them have the same importance). The main institution is where the author is professor or student, or, in case of not being professor or student anymore, the institution where the authors obtained their major academic title (PhD, J.S.D., LL.M, B.A., etc.). The institution's name must be written in full (not abbreviated) and in the original language of the institution (or in English for non-Latin languages), followed by an indication of the country of origin of the institution between parentheses. If the author is a professor and also a PhD, J.S.D or LL.M candidate in another institution, the main affiliation will be the institution where the author is candidate.

5.2.6. Country: indication of the country of the author's main institutional affiliation.

5.2.7. Bio Statement: indication of the author's abbreviated CV, with the information organized in the following sequence: first, the indication of the institution to which the author is affiliated as a professor; second, between parentheses, the city, state/province (if applicable) and country of the institution; third, indication of academic titles (starting with the highest); fourth, other bonds with scientific associations; fifth, profession; etc.

5.3. Title and Abstract

5.3.1. Title: title in the language of the article, with only the first letter of the sentence in capital letter.

5.3.2. Abstract: abstract in the language of the article, without paragraph or citations and references, with up to 200 words.

5.4. Indexing

5.4.1. Keywords: indication of 5 keywords in the language of the article (in lower case and separated by semicolons).

5.4.2. Language: indicate the acronym corresponding to the language of the article (Português=pt; English=en; Español=es).

5.5. Supporting Agencies: articles resulting from funded research projects should indicate in this field the source of funding.

5.6. References: insert the complete list of references cited in the article, with a space of one line between them.

6. Text Presentation and pre-textual elements

6.1. The article must have between 15 and 30 pages (size A4 – 21 cm × 29,7 cm), including introduction, development and conclusion (not necessarily with these titles) and a bibliographic reference list. The maximum number of pages can be relativized in exceptional cases, decided by the Editorial team.

6.2. Edges (margins) must be: top and left with 3 cm, bottom and right with 2 cm.

6.3. The text must use Font Times New Roman, size 12, line spacing 1.5, and spacing 0 pt before and after paragraphs.

6.4. References must use Font Times New Roman, size 10, simple space between lines.

6.5. In the development of the text, the paragraphs must contain decrease of 1.5 cm from the left margin. Titles and subtitles must be aligned with the left margin without decrease.

6.6. The structure should observe the following order:

- 6.6.1.** Title in the article's language, in bold, centralized, with the first letter of the sentence in capital letter.
- 6.6.2.** In case of indicating information related to the article (financing from sponsoring agencies, acknowledgments, translators, etc.), it is necessary to insert a footnote with an asterisk (not number) on the right side of the title in the article's language.
- 6.6.3.** Title in English, with only the first letter in capital letter, in bold and in italic, centralized. In the case of articles written in English, this element must be substituted by the title in Portuguese.
- 6.6.4.** The article must not include the names of the author(s). The information for publication purposes will be taken from the metadata entered by the author(s) in the journal's electronic system at the time of submission.
- 6.6.5.** Abstract in the article's language (font Times New Roman, 12, simple lines, without paragraph or quotations and references, until 200 words), preceded by the word "Abstract" written in the article's language.
- 6.6.6.** Indication of five keywords in the article's language (in lower case and separated by semicolon), preceded by the expression "Keywords" written in the article's language.
- 6.6.7.** Abstract in English (font Times New Roman, 12, simple lines, without paragraph or quotations and references, up to 200 words), preceded by the word "Abstract". In case of articles written in English, this element must be replaced by the abstract ("*resumo*") in Portuguese.
- 6.6.8.** Indication of five keywords in English (in lower case and separated by semicolon), preceded by the expression "Keywords". In case of articles written in English, this element must be replaced by keywords ("*palavras-chave*") in Portuguese.
- 6.6.9.** Table of contents, indicating the titles of the sections and subsections, with progressive numbering in Arabic numbers.
- 6.6.10.** Development of the scientific article: progressive numbering, in Arabic numbers, must be used to make clear the content's systematization.
- 6.6.11.** Bibliographic references list must bring only sources that were really used, located in the end of the article, separated by a simple space, lined to the left margin (no indent).
- 6.6.12.** For other aspects, apply Brazilian technical norms (ABNT NBR 10520:2002 e 14724:2011).
- 6.6.13.** In the case of articles with 4 or more authors, it is necessary to include a footnote indicating the contribution of each one to the article.
- 6.7.** Highlights must be made only in italics, meaning that bold, underlined or caps lock, cannot be used to highlight.
- 6.8.** Images and boards must be inserted in the text, not in the end in form of attachments.

7. Scientific Methodology

7.1. The references of books, chapters in collective books, articles, theses, dissertations/essays, monographs of quoted authors used as base to write the text must be mentioned as a reference on the footnotes, with all the information about the text, according to the Brazilian technical norms (ABNT NBR 6023:2018 – summarized in the item 7.1.3 below), and especially, indicating the page of which the information written on the text was taken, right after the reference.

7.1.1. Book's title (or journal's title) must be highlighted in italics (bold shall not be used for that purpose).

7.1.2. Articles written in the format AUTHOR-YEAR will not be accepted for publishing.

7.1.3. References shall appear as follows:

7.1.3.1. Books:

LAST NAME, Name Middle Name. *Title of the book in italics*: subtitle not in italics. Number of the edition. City: Publisher, Year.

Example:

KEEN, Andrew. *Vertigem digital: por que as redes sociais estão nos dividindo, diminuindo e desorientando*. Trad. Alexandre Martins, Rio de Janeiro: Zahar, 2012. 254p.

7.1.3.2. Chapter in a collective book:

LAST NAME, Name Middle Name. Title of the Chapter not in bold. In: ORGANIZER'S LAST NAME, Name Middle Name; 2ND ORGANIZER'S LAST NAME, Name Middle Name, and so on, separated by semicolon (Org. or Coord.). *Title of the book in italics*: subtitle not in Italics. Number of the edition. City: Publisher, Year. first page-last page [preceded by "p."].

Example:

DOTTA, Alexandre Godoy. Derechos de la Población LGBT+ en Brasil: Vulnerabilidad Social entre Avances y Retrocesos. In: BRAVO, Álvaro Sánchez; CASIMIRO, Ligia Melo de; GABARDO, Emerson. (Org.). *Estado Social Y Derechos Fundamentales en Tiempos de Retroceso*. Sevilha: Ponto Rojo, 2019. p. 203-228.

7.1.3.3. Articles in journals:

LAST NAME, Name Middle Name. Title of the article not in bold. *Title of the journal in italics*, city, volume, number, first page-last page [preceded by "p."], months of publishing [abbreviated with the first three letters of the month followed by dot and separated by a slash]. Year.

Example:

GABARDO, Emerson; SAIKALI, Lucas Bossoni. A prescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário em razão de atos de improbidade administrativa. *Revista Jurídica – Unicuritiba*, Curitiba, v. 1, p. 514-543, 2018.

7.1.3.4. Theses of Full Professor contests, Doctoral theses, Master's dissertations/ essays, Undergraduate and Graduate courses monographs:

LAST NAME, Name Middle Name. *Title in italics*: subtitle. City, year. number of pages followed by "f". Kind of the work (Degree obtained with the defense) – Department or Sector, Name of the institution.

Example:

SANTOS, Fábio de Sousa. *Análise Comparada da Competição na Contratação Pública Brasileira e Estadunidense*. Curitiba, 2018. 134f. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Curitiba: 2018.

7.1.3.5. DOI – Digital object identifier: If the document consulted in the research has the DOI number, it is recommended to include, in a complementary way, the number after the end of each reference. Example:

DOTTA, Alexandre Godoy. Public policies for the assessment of quality of the Brazilian higher education system. *Revista de Investigações Constitucionais*, Curitiba, v. 3, p. 53-69, 2016. DOI. [10.5380/rinc.v3i3.49033](https://doi.org/10.5380/rinc.v3i3.49033).

7.1.3.6. Documents in electronic media: Documents extracted from electronic media must present after the end of each reference the location of the network where it was found and presented as follows. Example:

DIJDL. International Journal of Digital Law. *Regras para a submissão de artigos*. Disponível em: <https://journal.nuped.com.br/index.php/revista/about/submissions>. Acesso em: 12 fev. 2020.

7.1.4. The elements of references must observe the following model:

7.1.4.1. Author: LAST NAME in capital letters, comma, Name with the initials in capital letters, Middle Name with the initials in capital letters, followed by a dot.

7.1.4.2. Edition: the information must only be included after the second edition of the book, without ordinal, followed by a dot and “ed.”. Example: 2. ed.

7.1.4.3. Year: it must be written with Arabic numerals, without dot in thousand, preceded by comma, and followed by a dot. Example: 1997.

7.1.5. In case of being impossible to find one of those elements, the absence must be resolved in the following manner:

7.1.5.1. Absence of city: replace for [S.I.].

7.1.5.2. Absence of publisher: replace for [s.n.].

7.1.5.3. Absence of year: the approximated year must be indicated between brackets, followed by a question mark. Example: [1998?].

7.2. The quotations (words, expressions, sentences) must be carefully reviewed by the authors and/or translators.

7.2.1. The direct quotations must follow this pattern: transcription until four lines should fit in the text body, with normal letter, normal spacing and quotation marks.

7.2.2. It is strongly recommended that long textual quotations (more than four lines) are not used. However, if indispensable, they shall constitute an independent paragraph, with 1,5 cm of decrease related to the left margin (justified alignment), with simple lines and font 10. In that situation, quotation marks must not be used.

7.2.3. It is forbidden the use of “op. cit.”, “loc. cit.”, “ibidem” and “idem” in the footnotes. The references in footnote must be complete and written out.

7.2.4. For the mention of authors in the text body, it is forbidden the use of capital letters (e.g. for Name LAST NAME...). In this case all mentions shall be written only with the first letter in capital letter (ex.: for Name Last Name...).

8. Composition

8.1. Apart from having an adequate scientific language for an editorial publication, the text must be reviewed.

8.2. In the case of articles written in Portuguese, the writing must obey the new orthographic rules in force since the promulgation of the Portuguese Language Orthographic Agreement, from January 1st, 2009.

8.3. Citations of texts that precede the Agreement must respect the original spelling.

9. Articles resulted from funded researches

Articles resulted from funded research projects shall indicate in a footnote, located at the end of the article title in the original language, the information related to the research financing.

10. Copyright statement

Authors who publish in this Journal have to agree to the following terms:

10.1. No copyright or any other remuneration for the publication of papers will be due.

10.2. Authors retain copyright and grant the International Journal of Digital Law the right of first publication with the article simultaneously licensed under the [Creative Commons Attribution License](#), which allows sharing the work with recognition of its initial publication in this Journal. Moreover, because of their appearance in this open access Journal, articles are free to use, with proper attribution, in educational and non-commercial applications.

10.3. Authors are allowed and encouraged to post their work online (e.g. in institutional repositories or on their personal webpage) at any point before or during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as increase the impact and citation of published work (see [The Effect of Open Access](#)).

11. Authors responsibilities

11.1. Authors are responsible for the published content, committing therefore to participate actively in the discussion of the results of their scientific research, as well as the review process and approval of the final version of the work.

11.2. Authors are responsible for the conducting all the scientific research, as well as its results and validity.

11.3. Authors should report the Journal about any conflict of interest.

11.4. Authors are fully and exclusively responsible for the opinions expressed in their articles.

11.5. When submitting the articles, authors recognize that all statements contained in the manuscript are true or based on research with reasonable accuracy.

12. Conflict of interest

The public confidence in the double-blind peer review process and the credibility of published articles depend in part on how conflicts of interest are managed during manuscript writing, peer review and decision making by the editors.

12.1. It is mandatory that the author of the manuscript declares the existence or not of conflicts of interest. Even thinking that there are no conflicts of interest, the author must declare this information in the article submission act, marking that field.

12.2. Conflicts of interest may appear when authors, reviewers or editors have interests that, apparently or not, may influence the development or evaluation of manuscripts.

12.3. When authors submit a manuscript, they are responsible for recognizing and revealing financial or other nature conflicts that may have influenced their work.

12.4. Authors must recognize all the financial support for the work and other financial or personal connections related to the research. The contributions of people who are mentioned in the acknowledgments for their assistance in the research must be described, and its consent to publication should be documented.

12.5. Manuscripts will not be simply dismissed because of a conflict of interest. A statement that there is or not a conflict of interest must be made.

12.6. The ad hoc reviewers must also reveal to editors any conflicts of interest that could influence their opinions about the manuscript and must declare themselves unqualified to review specific documents if they believe that this procedure is appropriate. In the

case of the authors, if there is silence from the peer reviewers about potential conflicts, it will mean that conflicts do not exist.

12.7. If a conflict of interest on the part of the peer reviewers is identified, the Editorial Board will send the manuscript to another ad hoc reviewer.

12.8. If the authors are not sure about what might constitute a potential conflict of interest, they should contact the Journal's Editor-in-Chief.

12.9. In cases in which members of the Editorial Team or some other member publish frequently in the Journal, it will not be given any special or different treatment. All submitted papers will be evaluated by double blind peer review procedure.

13. Other information

13.1. The articles will be selected by the Editor-in-Chief and the Editorial Board of the Journal, which will contact the respective authors to confirm the text reception, and then forward them to the two ad hoc reviewers' analysis.

13.2. The received and not published originals will not be given back.

13.3. Authors have the right to appeal of the editorial decisions.

13.3.1. They will be granted five (5) days from the date of the final decision of the Editorial Board to appeal.

13.3.2. The written appeal must be sent to the e-mail: <journal@nuped.com.br>.

13.3.3. The appeal will be examined by the Editorial Board within thirty (30) days

CONDITIONS FOR SUBMISSIONS

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

1. The contribution is original and unpublished (except in the case of articles in a foreign language published abroad) and it is not being evaluated for publication by another Journal; otherwise, it must be justified in "Comments to the Editor."
2. The submission file is in Microsoft Word, OpenOffice or RTF.
3. URLs for the references have been informed when possible.
4. The text has between 15 and 30 pages (A4 size – 21 cm by 29.7 cm), including the introduction, development, conclusion (not necessarily with these titles) and a list of references; margins used are: left and top of 3 cm and right and bottom of 2 cm; the text is written in Times New Roman format, size 12, line spacing 1.5, and spacing 0 pt. before and after paragraphs; in the footnotes it was used Times New Roman, size 10, 1 pt. spacing; in the text development, paragraphs have an indent of 1.5 cm from the left margin; headings and subheadings are aligned on the left margin; figures and tables are inserted in the text, not in the end of the document as attachments.
5. The text respects the stylistic and bibliographic requirements outlined in the [Author Guidelines](#), on the page About.
6. In case of submission to a section with peer review (e.g.: articles), the instructions available in [Ensuring blind evaluation by peer reviewers](#) have been followed.
7. The author states that, except for the direct and indirect quotations clearly indicated and referenced, the article is of his/her authorship and therefore does not contain plagiarism. And states that he/she is aware of the legal implications of the use of other authors material.

8. The author states that participated in the work enough to make public their responsibility for the content and that all statements contained in the manuscript are true or based on research with reasonable accuracy.
9. The author agrees with the liability policy defined in item 10. Authors responsibilities of the [Author Guidelines](#).

PRIVACY STATEMENT

This journal is committed to ethics and quality in publication, following international patterns of scientific publication. We support standards of expected ethical behavior for all parties involved in publishing in our journal: the author, the journal editor, the peer reviewer and the publisher. We do not accept plagiarism or other unethical behavior. Thus, it follows the guidelines of the [2nd World Conference on Research Integrity](#), Singapore, July 22-24, 2010.

Duties of Editors

- **Publication decision:** The journal's editor is responsible for deciding which of the articles submitted to the journal should be published. The editor is guided by the policies of the journal's editorial board and constrained by such legal requirements as shall then be in force regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editor may consult with editorial board or reviewers in decision making.
- **Fair play:** The editor should evaluate manuscripts for their intellectual content without regard to race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the authors.
- **Confidentiality:** The editor and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.
- **Disclosure and Conflicts of interest:** The editor must not use unpublished information in his/her own research without the express written consent of the author. The editor should recuse him/herself from considering manuscripts in which he/she has conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or (possibly) institutions connected to the papers.
- **Involvement and cooperation in investigations:** The editor should take reasonable responsive measures when ethical complaints have been presented concerning a submitted manuscript or published paper.

Duties of Reviewers

- **Contribution to Editorial Decision:** Peer review assists the editor in making editorial decisions and through the editorial communications with the author may also assist the author in improving the paper.
- **Promptness:** Any selected referee who feels unqualified to review the research reported in a manuscript or knows that its prompt review will be impossible should notify the editor and excuse himself from the review process.
- **Confidentiality:** Any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others.

- **Standards of Objectivity:** Reviews should be conducted objectively and referees should express their views clearly with supporting arguments.
- **Acknowledgement of Source:** Peer reviewers should identify relevant published work that has not been cited by the authors. The peer reviewer should also call to the editor's attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published paper of which they have personal knowledge.
- **Disclosure and Conflicts of Interest:** Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the papers.

Duties of Authors

- **Reporting standards:** Authors of reports of original research should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussion of its significance. Underlying data should be represented accurately in the paper. A paper should contain sufficient detail and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behavior and are unacceptable.
- **Originality and Plagiarism:** The authors should ensure that they have written entirely original works, and if the authors have used the work and/or words of others that this has been appropriately cited or quoted. Plagiarism in all its forms constitutes unethical publishing behavior and is unacceptable.
- **Multiple or Redundant Publication:** An author should not in general publish manuscripts describing essentially the same research in more than one journal or primary publication. To publish the same article in different journals without informing the editors and having their agreement constitute unethical publishing behavior and is unacceptable.
- **Acknowledgement of Sources:** Proper acknowledgment of the work of others must always be given. Authors should cite publications that have been influential in determining the nature of the reported work. Information obtained privately, as in conversation, correspondence, or discussion with third parties, must not be used or reported without explicit, written permission from the source. Information obtained in the course of confidential services, such as refereeing manuscripts or grant applications, must not be used without the explicit written permission of the author of the work involved in these services.
- **Authorship of the Paper:** Authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the conception, design, execution, or interpretation of the reported study. All those who have made significant contributions should be listed as co-authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be acknowledged or listed as contributors. The corresponding author should ensure that all appropriate co-authors and no inappropriate co-authors are included on the paper, and that all co-authors have seen and approved the final version of the paper and have agreed to its submission for publication.

- **Disclosure and Conflicts of Interest:** All authors should disclose in their manuscript any financial or other substantive conflict of interest that might be construed to influence the results or interpretation of their manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.
- **Fundamental errors in published works:** When an author discovers a significant error or inaccuracy in his/her own published work, it is the author's obligation to promptly notify the journal editor or publisher and cooperate with the editor to retract or correct the paper.

Duties of the Publisher

We are committed to ensuring that advertising, reprint or other commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions.

Our articles are peer reviewed to ensure the quality of scientific publishing and we are also users of CrossCheck (CrossRef's plagiarism software).

* This statement is based on Elsevier recommendations and COPE's Best Practice Guidelines for Journal Editors.